

Llanos orientales: Neoparamilitarismo, violencia, víctimas y Memoria histórica.

Horacio Duque.

En este texto vamos a examinar la problemática de la violencia, sus actores centrales y sus consecuencias en el territorio de los Llanos orientales, que incluye los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Desde mediados de los años 80, la violencia en esta región mostró toda su ferocidad con el exterminio de la Unión Patriótica, constituida a raíz de los acuerdos de paz de las Farc con el gobierno de Belisario Betancur; igualmente con la acción de la guerrilla de las Farc (1984); y posteriormente con la presencia de los grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada/ACMV (Carranceros), el Bloque Centauros (urabeños), las Autodefensas del Casanare (Buitragueños), el Bloque Vencedores (Arauca) y el Bloque Central Bolívar del Vichada (Macacos), que han tenido un amplio apoyo de integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado y de las elites económicas y políticas regionales.

Esa violencia, como fenómeno social con distintas manifestaciones, se ejecutó con masacres, homicidios, secuestros, desaparecidos, campesinos despojados de sus tierras, desplazados y víctimas. Se trata de una violencia histórica y estructural que se da como parte de la formación social semifeudal dominante y de las estructuras estatales de control.

La misma persiste con la presencia de grupos sucesores del paramilitarismo, con las disidencias de las Farc y con la acción arbitraria de las instituciones militares y policiales.

En este documento abordaremos las características de la región llanera colombiana, su población, su economía, sus tendencias territoriales e históricas.

Seguidamente haremos unas consideraciones conceptuales sobre la violencia.

Después abordaremos los actores regionales de la violencia en su ruta histórica y operativa.

Analizaremos la parapolítica, su impacto electoral y político.

Miraremos las consecuencias de dicha violencia en su impacto en los derechos humanos de la población.

Y plantearemos algunas reflexiones e iniciativas en materia de Memoria Histórica.

Caracterización de la región.

Los Llanos se extienden al Oriente y Sur de la Cordillera Andina Oriental, cubriendo un área de 253.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 800 mil habitantes. Cruzada

por rápidos y caudalosos ríos que desembocan al Este, en el Orinoco, y se adentran en Venezuela, la región es por turnos una tierra de inundaciones y sequías (<https://bit.ly/31rh9cP>). Hay cinturones de selva en las riberas de los ríos, pero la vegetación predominante es un pasto alto tropical que alimenta manadas de ganado y caballos salvajes que descienden de animales introducidos por los españoles. La región constituye la quinta parte del territorio de Colombia y comienza a menos de ciento cincuenta kilómetros (en línea recta) de la capital, Bogotá, pero por siglos la escarpada Cordillera Oriental, que alcanza cumbres de 5.800 metros, ha bloqueado el acceso a estas planicies.

La conquista colonial y religiosa de los Llanos Orientales.

Hacia 1598, los padres Jesuitas instauraron su proyecto evangelizador, conocido como La Misión, un plan económico y religioso en el que se aculturizaba al indígena con disciplina y se creaban grandes hatos con ganado y caballos. La Misión duró hasta finales del siglo XVII cuando el rey de España, Carlos III, expulsó a los padres Jesuitas del imperio español y en consecuencia, de los Llanos Orientales. Sin embargo, la presencia religiosa perduró luego de la independencia y poco a poco nuevas comunidades fueron llegando, como los monfortianos a comienzo del siglo XX (<https://bit.ly/3hvNXHa>).

Los aspirantes a colonos, tras recorrer un difícil trayecto en ásperos caminos de montaña, se enfrentaban a una descorazonadora región de clima inhóspito (nueve meses de intensa lluvia y tres meses de sequía), llena de enfermedades (malaria, fiebre amarilla, cólera, anquilostomiasis y anemia tropical) y casi completamente aislada del resto del país.

Los Llanos orientales históricamente se conocieron como los Llanos de San Martín y los de Arauca, incluyendo Casanare que dependió por muchos años del departamento de Boyacá.

Casi la tercera parte de los llaneros vive en Villavicencio, el mayor núcleo urbano de la región, conocido como “La puerta del Llano”. Antes de la llegada de los españoles, los llanos tenían una población escasa, compuesta de cazadores y recolectores nativos y aldeanos selváticos que habían adaptado sus culturas a las limitaciones del medio ambiente tropical. La esperanza de encontrar el legendario El Dorado animó a los españoles, y en los siglos XVI y XVII cientos de conquistadores exploraron sus pastizales buscando en vano ese reino de fábula. Los siguieron encomenderos, administradores, cazadores de esclavos, rancheros y misioneros que subyugaron a los nativos y establecieron pequeños y remotos enclaves.

Para el siglo XVIII, la Misión había emergido como institución principal del régimen imperial, y el mestizaje entre españoles e indígenas produjo una subcultura de vaqueros - los llaneros-, quienes durante la guerra de Independencia fueron el núcleo del ejército de

Simón Bolívar que había de ganar una decisiva batalla contra el ejército español en el Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819.

A lo largo del siglo XIX, los gobiernos de Colombia esporádicamente intentaron desarrollar la porción de la república que quedaba al Este, más allá de los Andes. Entre las estrategias que emplearon se incluyen el restablecimiento de las misiones, la promoción de la navegación fluvial a vapor, la construcción de caminos, el apoyo a la inmigración y el fomento al crecimiento económico mediante la introducción de nuevas cosechas, mejores pastos y mejores razas de ganado. Para mediados del siglo XX estas políticas habían tenido algún impacto en la zona del piedemonte, conocida como “Llanos Arriba”, pero habían cambiado poco en la sección más al Este de las planicies o “Llanos Abajo”. Como resultado, varios geógrafos que estudiaron la región describieron a los Llanos como una “frontera permanente”, la cual, a diferencia de la frontera en movimiento de Estados Unidos, había permanecido estática (<https://bit.ly/2YvjilO>).

Giro en el Siglo XX.

Durante la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, el desarrollo de los Llanos tomó un giro brusco. La Violencia, la sangrienta guerra civil que estalló en 1948 y duró hasta 1958, tuvo a los Llanos como importante teatro de operaciones, pero incluso a medida que 9.000 personas abandonaban las llanuras buscando seguridad en las ciudades, dicha pérdida se veía más que compensada por 16.000 nuevos inmigrantes que llegaban huyendo de la violencia en otras partes de Colombia. Animados por nuevas medidas de salud que redujeron la insalubridad del clima y por la posibilidad de colonizar tierras públicas, estos nuevos colonos vinieron con la esperanza de comenzar una nueva vida con sus familias. Elevado a la categoría de departamento en 1959, el territorio del Meta en especial continuó en expansión, atrayendo colonos gracias a mejoras en la autopista Bogotá-Villavicencio y su extensión a Puerto López, a la ladera del río Meta.

Para 1972 el Meta era la región de más rápido crecimiento en Colombia, con una población de 343.361 habitantes, de los cuales el 35%, residían en Villavicencio. Esta expansión fenomenal continuó a pesar de los brotes de violencia guerrillera, el influjo de los carteles de drogas y las actividades de organizaciones paramilitares y del ejército colombiano (<https://bit.ly/3jbGevp>).

El petróleo.

El descubrimiento de campos petrolíferos explotables trajo a la región nuevos ingresos; otro tanto hizo el aumento en los cultivos comerciales de arroz y otros productos. Recientemente se han propagado los cultivos de palma de aceite.

La Constitución de 1991 declaró departamentos a Casanare, Arauca y Vichada en reconocimiento a su población en auge.

En 2005 la población del Meta alcanzó los 658.427 habitantes, con 272.118, en Villavicencio. El departamento producía para entonces una fracción importante de los alimentos básicos consumidos en la capital, tanto que hubo planes serios de establecer un aeropuerto internacional en las afueras de Villavicencio para aliviar la presión sobre el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A pesar de seguir teniendo poco más del uno por ciento de los 40 millones de colombianos, los Llanos continúan siendo una de las regiones de más rápido crecimiento del país, en términos tanto económicos como demográficos (<https://bit.ly/3aWvZeC>).

Los Llanos en la historia de Colombia.

Hoy es claro que, comenzando con la conquista de la Nueva Granada en 1530, los Llanos y sus gentes han desempeñado papeles importantes en eventos históricos claves como la Revolución de los Comuneros (1780–83); la Guerra de Independencia (durante la cual los llaneros del Casanare conducidos por Bolívar y Santander derrotaron a los españoles en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819); los esfuerzos de los Liberales por poblar los Llanos en la era de la Constitución de Rionegro (1863–1886); la Guerra de los Mil Días (1899–1903); la “Revolución en Marcha” del presidente Alfonso López Pumarejo (1934–1938); la primera ola de la Violencia (1949–1953); y más recientemente como terreno fértil para el conflicto armado y las actividades de narcotráfico.

En su composición demográfica hay comunidades indígenas como los Sikuni (Guahibos), Sálivas, Piapocos y Nukak.

La violencia como fenómeno social y político.

La violencia en los Llanos orientales se encuadra en los modelos de violencia que han afectado a lo largo de su historia tanto a la nación como a la sociedad y al Estado.

Antes de examinar en sus manifestaciones concretas la violencia en la region y sus actores centrales recojamos algunos elementos sobre este fenómeno recurrente en nuestra formación social.

En principio abordemos algunas consideraciones teóricas sobre la misma.

El estudio de la violencia en Colombia, y por consiguiente la de los Llanos orientales, ha presentado diversos momentos como lo señala con rigor Carlos Ortiz en su amplia obra sociológica, histórica e historiográfica (<https://bit.ly/34DmEXM>).

Jefferson Jaramillo Marín nos ha dado una muy completa descripción y análisis sobre las investigaciones de tal fenómeno. Mónica Zuleta igualmente ha hecho un denso trabajo sobre el fenómeno en “La violencia en Colombia: avatares de la construcción de un objeto de estudio” (<https://bit.ly/3lhl8R9>).

Los trabajos de Gonzalo Sánchez y del Centro de Memoria Histórica son de obligada referencia en cualquier acercamiento a dicha fenomenología. El informe ¡Basta Ya! es un punto de obligado análisis para quien pretenda dar cuenta de la violencia colombiana.

De necesaria referencia es el trabajo de Jerónimo Ortiz Sierra “Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012” (<https://bit.ly/32hCjJy>)

El más reciente estudio sobre la violencia colombiana fue el informe elaborado para la Mesa de diálogos con las Farc en La Habana conocido como “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de Febrero de 2015 (<https://bit.ly/2QpWMGS>).

Lo que llama la atención es que no obstante estos estudios tan amplios y reputados, y haber llegado a unos acuerdos para poner fin al conflicto social armado con las Farc, la violencia persista con tanta perversidad, con masacres, asesinando a líderes sociales y a quienes se desmovilizaron como integrantes de las Farc.

No parecen ser suficientes los enfoques que vinculan la violencia con el tema de la tierra, la miseria (que es desigualdad, más que violencia), la exclusión política y con las economías ilícitas.

Hay algo más que eso que debe ser objeto de estudio.

Los estudios de Blair y Han.

Quiero citar inicialmente acá dos textos que considero bastante pertinentes para explorar nuevas rutas explicativas de la violencia en el post conflicto y otras formas de abordarlas para lograr su erradicación definitiva.

Elsa Blair en “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”, nos ofrece una reflexión teórica sobre el fenómeno de la violencia que resulta conveniente rescatar. Su trabajo desarrolla una aproximación y una “lectura crítica” del concepto de violencia y problematiza su dificultad de teorización dada la variedad semántica de la palabra que, como deja ver, es inmensa y termina por nombrar cosas bastante disímiles. Luego de una reflexión general sobre el concepto y sus avatares, se detiene en buena parte de lo que ha sido la discusión sobre el tema en Colombia. Para hacer esta reflexión, la autora

se apoya en diferentes referentes teóricos, que han sostenido su actividad investigativa durante los últimos años (<https://bit.ly/3gtlShs>).

La visión de Byung-Chul Han.

Más recientemente el filósofo Byung-Chul Han ha dado a conocer un estudio de bastante profundidad y actualidad sobre la violencia.

Me refiero a las “Topologías de la violencia” (<https://bit.ly/2Yz2Zoi>), obra en la que Byung-Chul Han da continuidad a su análisis de la sociedad contemporánea, después de libros como “La sociedad del cansancio” o “La sociedad de la transparencia”, centrándose en este caso en la violencia, que, según sus tesis, es omnipresente en la sociedad tardomoderna, aunque no se perciba como tal.

En su texto Han plantea que hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se cuenta la violencia. Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, la violencia ha mutado de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcomunicativos y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. Pero la violencia se mantiene constante. Simplemente se traslada al interior. La decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia.

Han afirma que hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la violencia. La Modernidad no se define, precisamente, por su aversión a esta.

La violencia, dice, solo es proteica (cambiante en sus formas). Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. En el momento en que coincide con su contrafigura, esto es, la libertad, se hace del todo invisible. Hoy en día, la violencia material deja lugar a una violencia anónima, desubjetivada y sistémica, que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad.

La topología, plantea Han, de la violencia se refiere, en primer lugar, a toda manifestación macrofísica de la violencia, que se presenta como negatividad, es decir, estableciendo una relación bipolar entre el yo y el otro, entre dentro y fuera, entre amigo y enemigo. En general, suele darse de un modo expresivo, explosivo, masivo y materialístico. Forman parte de esta, la violencia arcaica del sacrificio y de la sangre, la violencia mítica de los dioses

celosos y vengativos, la violencia de la muerte del soberano, la violencia de la tortura, la violencia exangüe de la cámara de gas o la violencia viral del terrorismo. Sin embargo, la violencia macrofísica puede tomar una apariencia más sutil y expresarse, por ejemplo, como violencia lingüística. La violencia de una lengua hiriente también remite, como la violencia física, a la negatividad, pues resulta difamadora, desacreditadora, denigradora, o desatenta. La violencia de la negatividad se distingue de la violencia de la positividad, basada en la spamización del lenguaje, en la sobrecomunicación y la sobreinformación, en la masificación lingüística, comunicativa e informativa.

La sociedad actual evita cada vez más la negatividad del otro o del extranjero. El proceso de globalización ha acelerado la desaparición de las fronteras y las diferencias. La supresión de la negatividad no se puede equiparar con la desaparición de la violencia, pues junto a la violencia de la negatividad existe también la violencia de la positividad, que se ejercita sin necesidad de enemigos ni dominación.

No solo el exceso de negatividad es violencia, sino también el exceso de positividad, la masificación de lo positivo, que se manifiesta como sobrecapacidad, sobreproducción, sobrecomunicación, hiperatención e hiperactividad. La violencia de la positividad probablemente sea mucho más funesta que la violencia de la negatividad, pues carece de visibilidad y publicidad, y su positividad hace que se quede sin defensas inmunológicas. La infección, la invasión y la infiltración, características de la violencia de la negatividad, son causa de infarto.

En este sentido, el sujeto de rendimiento, propio de la Modernidad tardía, es libre, pues no se le impone ninguna represión mediante una instancia de dominación externa. En realidad, sin embargo, goza de tan poca libertad como el sujeto de obediencia.

Si la represión externa queda superada, la presión pasa al interior. Y eso hace que el sujeto de rendimiento desarrolle una depresión. La violencia se mantiene constante. Simplemente se traslada al interior. La decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia. La violencia sufre una interiorización, se hace más psíquica y, con ello, se invisibiliza. Se desmarca cada vez más de la negatividad del otro o del enemigo y se dirige a uno mismo.

Broek, citado por Han, plantea que en el pasado, de acuerdo a Han, la violencia social era externa, flagrante, basada en la relación del sujeto subordinado con el soberano, en la que la vida o la muerte se deciden unilateralmente, desde la instancia de autoridad. A este tipo de sociedad la llama «de la decapitación», pues la voluntad es ajena al sujeto, y el poder se ejerce con carácter absoluto.

Más tarde, la sociedad evolucionaría hacia una sociedad disciplinaria, en la que las relaciones estructurales perpetúan un estado de dominación del poseedor del capital sobre las masas trabajadoras. En su terminología llama a esta sociedad una «de la deformación», por su capacidad de formar a su antojo las necesidades de la explotación capitalista y la identidad de los sujetos involucrados. En nuestros tiempos, la violencia se ejerce desde dentro, pues cada ciudadano la ejerce sobre sí mismo, y se genera el fenómeno de la autoexplotación, en el cual el ser humano ejerce su libertad para encarcelarse a sí mismo en un individualismo que satisface las demandas del capital y la globalización. Han caracteriza a esta sociedad como la sociedad «del rendimiento», que produce fenómenos psíquicos como la depresión, o el burnout y el déficit de atención por hiperactividad.

Mientras que en las sociedades que nos anteceden la violencia operaba por negatividad, esto es, incitando una reacción inmunológica, de defensa, pues las líneas de confrontación eran claras, hoy día el problema sería un exceso de positividad, que ofusca toda negatividad y desplaza la violencia al interior de uno mismo, a pesar de las apariencias de prosperidad y libertad que prevalecen. Con estas ideas, Han entabla un diálogo con algunos pensadores que le han servido de contraparte o de inspiración, como Schmitt o Ehrenberg o Foucault, el cual es una obvia referencia en su armazón conceptual, por su análisis de la violencia estructural y de la presencia del poder en las relaciones de la sociedad disciplinaria.

Pero Foucault no tuvo tiempo de asistir a la emergencia de una sociedad en la que las relaciones de poder se difuminan y se interiorizan, en las que la ideología y las líneas de confrontación han desaparecido, y en la que la transparencia elimina toda subjetividad negativa o crítica con el sistema que uno ha interiorizado. De la misma manera, Han critica a Negri, por ejemplo, por mantener un marco conceptual marxista de análisis, ya que las clases han desaparecido (según Han) y solo existe un sistema único, que exige de uno la participación en el sistema global del capitalismo, que, a pesar de invadir nuestra intimidad, se presenta como un sistema de positividad y libertad absolutas, en el que las identidades son fluidas y moldeables, a diferencia de la sociedad disciplinaria, donde las identidades eran fijas.

A la sociedad moderna la llama Han, como dijimos, “sociedad del rendimiento”, pues el valor de la realidad y de los individuos se establece sobre la base de su producción económica y de su contribución al crecimiento del sistema, lo que ocurre con la anuencia de los que participan, embriagados por la positividad presente de consumo infinito, comunicación global, despliegue constante de la intimidad, sin lugar al misterio o al secreto, dado que el sistema nos necesita con ilusión de libertad y con disposición para el consumo, a fin de funcionar a cabalidad. Para lograr este estado de cosas, la sociedad requiere de nosotros la autoexplotación, en la que víctima y verdugo son lo mismo, esto es, ejercer una

violencia íntima que nos lleva al cansancio, al infarto social y a la depresión, la enfermedad por excelencia de esta sociedad de violencia microfísica, en el planteamiento de Broek.

Cito estos dos enfoques teóricos de la violencia como aporte para un estudio más consistente de la violencia en los Llanos orientales.

A los mismos efectos resulta pertinente retomar los esquemas analíticos de larga duración de la violencia colombiana. Me refiero a los trabajos de Marcos Palacio, Fernán Gonzales y Gonzalo Sanchez.

La interpretación de Marcos Palacios.

Palacios (2012) en su libro “Violencia pública en Colombia” (<https://bit.ly/2Evfhaa>) tiene como referente para su periodización el funcionamiento del Estado con su déficit de legitimidad y soberanía en el territorio y en el sistema internacional. Para construir sus periodizaciones plantea los grandes cambios en el Estado-nación con un especial énfasis en la dimensión internacional. Plantea grandes hitos como: la guerra fría, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el consenso de Washington. Su entendimiento central del conflicto es que se trata de una disputa violenta, entre élites por medio de la violencia pública. Es decir, se trata de una violencia que requiere un discurso de autolegitimación de cada una de las partes. Los bandos en la disputa son aquellas élites gobernantes del Estado y sus aliados (acá Palacios ubica a paramilitares y narcotraficantes como fuerzas “pro-sistema”), contra aquellas que buscan desalojarlas por medio de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. La periodización de este autor, aunque específicamente no la delimita, sí considera tres grandes etapas de la “violencia pública” en Colombia. La primera de ellas que va desde la segunda mitad de los años cincuenta y toda la década del sesenta, en la que a nivel internacional se caracterizó por el inicio de la guerra fría. En ese periodo, Palacios enfatiza su narrativa en la distribución de legitimidades entre la insurgencia y contrainsurgencia, y se enfoca en describir la influencia internacional sobre el conflicto interno, y el surgimiento de grupos armados de corte marxista. Un segundo periodo, que podría considerarse como de “frontera”, entre uno y otro, se ubica a lo largo de la década de los setenta, hasta mediados de los noventa. Ese periodo se caracteriza como un salto cuantitativo del conflicto armado y de la profundización de la guerra sucia de baja intensidad. Intensificación en la que tiene un importante grado de responsabilidad la irrupción del narcotráfico, la emergencia de los grupos paramilitares y las prácticas de guerra contrainsurgente y sucia que, heredadas de la doctrina anticomunista de la guerra fría, fueron acentuadas por el estamento castrense para enfrentar las guerrillas en los territorios donde estas hacían presencia, violencia que también se dirigió contra los sectores que los militares consideraban sus aliados, en los que se incluía a la izquierda política legal y los movimientos sociales. Conforme lo muestra Palacios, en el cierre de este

periodo además de terminarse la guerra fría, se abre la puerta a las primeras reformas neoliberales, fruto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, emergen con gran potencia los carteles de la droga y con ellos, la guerra en su contra. Así, se pasó de una confrontación que enfrentaba al Estado con las guerrillas marxistas, a una violencia generalizada que implicaba múltiples actores, y diversos intereses económicos y políticos, que produjeron procesos que marcarían el devenir posterior de la guerra: la mayor fragmentación del Estado, la fluidez entre lo legal y lo ilegal, la exacerbación del individualismo y la pérdida de referentes colectivos. Por último, en un tercer momento Palacios contempla paralelamente lo que denomina “la paz cuatrienal” y aborda los contextos de cada uno de los intentos de paz presidencial emprendidos con diferentes grupos armados, desde principios de los años ochenta, hasta el proceso iniciado por el gobierno Uribe con las AUC.

El estudio de Fernán Gonzales.

Por otro lado, se encuentra la propuesta de síntesis histórica de González en su libro “Poder y violencia en Colombia” (<https://bit.ly/3aRZrCw>). Desde una visión procesual y de largo plazo, lejana a enfoques normativos y teleológicos, González propone ver la violencia en relación con el conflictivo proceso de construcción del Estado. Esto, desde un enfoque que combina la necesidad de considerar los problemas estructurales de la vida colombiana y sus transformaciones en el tiempo y en el espacio: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, el problema agrario no resuelto y la integración territorial y política de las regiones. Lo anterior, sin dejar de lado los aspectos subjetivos de la percepción, valoración y accionar de diferentes agentes sociales, entre los que se consideran aquellos que optaron por la opción armada. González establece una periodización extensa que tiene como punto de arranque la herencia colonial y las turbulencias del siglo XIX, es decir, los inicios de la conflictiva construcción estatal y su presencia diferenciada en el tiempo y en el espacio, que aún hoy se mantiene. Con ese presupuesto, el autor interpela el hábito de pensamiento que ha imperado en la producción académica y en la discusión pública, que establece una relación directa entre el conflicto armado y la ausencia del Estado en los territorios. Y plantea que el hecho cierto de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, más que una anomalía es parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de la construcción de la nación. Así las cosas, la periodización emprendida por González analiza las diferentes etapas de las transformaciones del Estado, su relación con las regiones y los momentos de conflictividad y violencia, hasta el conflicto armado contemporáneo. En esa medida, en un primer periodo, describe los antecedentes coloniales y del siglo XIX, especialmente las dinámicas de poblamiento original, las dificultades que sobre el control del territorio y de la población

tuvo el Estado colonial y el impacto de las reformas borbónicas; así como las tensiones regionales en los inicios de la República, y luego, la competencia política y el papel de los partidos Liberal y Conservador, y las redes bipartidistas durante el siglo XIX. En un segundo periodo, de 1905 a 1930, se ocupa de describir el proceso a través del cual la hegemonía de los partidos Liberal y Conservador empieza a ser controvertida por otros actores, como resultado del surgimiento de tensiones en el incipiente mundo obrero y en el mundo rural de una frontera agraria en permanente expansión. Un tercer periodo contemplado por González se denomina “modernización y violencia” y va desde 1930 hasta 1957. En esa etapa, el autor establece un contraste entre dos momentos: La primera violencia que enfrentó a nivel regional las Fuerzas Armadas del gobierno liberal con los grupos armados de los políticos conservadores en los departamentos de Boyacá y Santander, en un contexto nacional polarizado, resultado de las tensiones entre los intentos de modernización de la República liberal, el surgimiento de la movilización social (obrero y campesina) y los sectores que, desde la derecha, se oponían al experimento reformista del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945). Y el periodo de La Violencia, entre 1948 y 1957, cuando de las disputas violentas ligadas a la homogeneización política en el ámbito local, se pasó a la generalización de la violencia, según González por los siguientes factores: la lectura complotista del 9 de abril, tras el asesinato del líder populista liberal Jorge Eliécer Gaitán; el predominio del fundamentalismo conservador, representado por el presidente Laureano Gómez; el colapso parcial del Estado y la ligazón entre las venganzas de sangre y las rivalidades bipartidistas a escala local. En síntesis, La Violencia en este tramo histórico, afirma el autor, fue resultado de la convergencia entre la aceleración de la modernización agraria capitalista, la agudización del conflicto agrario y la exasperación de las identidades partidistas. En el cuarto periodo, González describe las vicisitudes del Frente Nacional y el acuerdo consociacionista con el que las élites pretendieron poner fin a la violencia. Afirma el autor que, en ese momento, si bien hubo una sustancial disminución de la violencia fue evidente el fracaso de los intentos reformistas, especialmente en el sector rural, para enfrentar los cambios demográficos, culturales y sociales de esos años, lo que derivaría en el surgimiento de un nuevo tipo de violencia política con la emergencia de grupos armados de carácter marxista. Finalmente, el autor analiza el periodo de la violencia y el conflicto armado contemporáneo (1982-2014) en el que examina los debates sobre los orígenes y persistencia de la violencia, el conflicto armado y el fenómeno paramilitar. En este periodo el autor distingue varias etapas de las que resaltamos su contribución a la caracterización y evolución sobre el paramilitarismo: primera etapa, emergencia de los grupos paramilitares como respuesta a la expansión de los grupos guerrilleros en los años ochenta; segunda, ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana; y la etapa de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, negociación con las AUC y aparición y expansión de grupos armados surgidos de

este proceso de negociación; y finalmente el proceso de negociación con las FARC, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

En la etapa que denomina la primera ola de expansión de los grupos violentos en la década de los ochenta, González destaca como elementos centrales: la crisis del sistema político y la creciente movilización social al margen del bipartidismo; la expansión de las FARC hacia nuevas regiones, más allá de sus tradicionales zonas de colonización, y la reactivación del ELN y el EPL; además de la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. Factores y nuevos escenarios de la guerra que, sumados al ambiguo y débil proceso de negociación emprendido por Belisario Betancur con las guerrillas (1982-1986), explican la aparición y primera ola de expansión de los grupos paramilitares, que tuvieron el auspicio de los sectores que se oponían –por motivos económicos o políticos– a la negociación con las guerrillas y a las reformas que de ello se podrían derivar: narcotraficantes, poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y la clase política tradicional. La segunda ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar abarca los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. En esa etapa, el intento de relegitimación del sistema político buscado con la Constitución de 1991, con el que se logró la inserción a la política legal del M-19, el EPL y el PRT, no detuvo la generalización de la guerra ni la intensificación de la violencia política. Al contrario, la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, sumado al mayor relacionamiento de los grupos armados con los cultivos de coca y la producción y el comercio de la cocaína, tendrían como resultado, para el final del periodo –en medio de las negociaciones del Caguán–, la mayor expansión geográfica de los grupos paramilitares y guerrilleros, así como la intensificación de la violencia política a niveles nunca antes alcanzados. Lo anterior, según González, por cuenta de las decisivas transformaciones estratégicas en relación con la guerra, tanto del Estado como de los grupos armados: por un lado, las FARC, deciden el aumento de su capacidad bélica y la continuación de la expansión hacia las zonas más articuladas a la vida económica y política de la nación; y por otro lado, los paramilitares, como respuesta, se ensanchan a zonas de control guerrillero, deciden exportar el modelo de seguridad y desarrollo experimentado en el Magdalena Medio y Urabá en los años ochenta y lograr el reconocimiento político con la conformación de las AUC; y finalmente, el Estado dio inicio a la reingeniería de las fuerzas militares, con el apoyo financiero y tecnológico de los Estados Unidos y el Plan Colombia, para la recuperación militar del territorio. Así, en opinión del autor, esos factores explican en buena medida el fracaso de las negociaciones y la búsqueda de la paz en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ya que la combinación ambigua entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, la lógica militar y política, los abusos de las FARC en la zona de despeje y la arremetida paramilitar, harían incierta la agenda de negociación, y bloquearían de manera persistente el desarrollo de las negociaciones. Este fracaso explica la llegada de Álvaro Uribe (2002-2010) al poder, etapa que González

denomina como de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, por cuenta de la ofensiva militar que ese Gobierno desató contra estas, lo que contrastaba, con las polémicas negociaciones que sostuvo con los grupos paramilitares. De esa etapa, el autor destaca los cambios del estilo político del Gobierno y sus pretensiones neocaudillistas, que se concretaron en una combinación entre apelación populista, el manejo mediático del poder personalizado, la negociación clientelista con la clase política tradicional y los estímulos tributarios y financieros a los gremios. También destaca los polémicos resultados de la negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD, los efectos diferenciados de la Seguridad Democrática y los cambios en las territorialidades del conflicto. Así, para González, si bien se logró la recuperación militar del territorio integrado del país y la profundización de la derrota estratégica de las guerrillas, el énfasis militar y la ausencia de atención a los problemas sociales en las zonas recuperadas, implicaría que no solo se mantuvieran las guerrillas, sino que emergiera una nueva generación paramilitar en las zonas fronterizas (Catatumbo, Urabá y andén Pacífico) y en las zonas de colonización de la Orinoquia y el Amazonas.

La violencia en la versión del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Otra de las síntesis elaboradas en el último tiempo es la realizada por el Grupo de Memoria Histórica, en cumplimiento del mandato de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales. Esta síntesis fue publicada en 2013, en el Informe general del conflicto armado: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (<https://bit.ly/2CVVzUo>). Los principales alcances y objetivos del informe, que han sido parte fundamental de las apuestas del inicial GMH y luego del CNMH, se pueden resumir así: interpelar a la sociedad y exhortar al Estado desde la perspectiva de la memoria de las víctimas, para comprender lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Por eso, el informe construye una síntesis que se aleja del reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas, para comprender la violencia en sus diferentes etapas y manifestaciones, como resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables. Enfatizando en la visibilización de las magnitudes de la violencia, las diferentes dimensiones de la victimización y el rol de las víctimas, como agentes activos en el marco del conflicto armado, esto en el entendido de que Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella. En el informe ¡Basta ya!, sus autores, en consonancia con González y Palacios, resumen así los factores que explican tanto el origen como la reproducción del conflicto: persistencia del problema agrario; la irrupción y propagación del narcotráfico, las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Si bien, en el capítulo dos, estos factores atraviesan la periodización del conflicto armado que propone

el ¡Basta ya!, también analiza otras dimensiones, como los cambios cualitativos y cuantitativos de las modalidades de victimización contra la población civil, las relaciones entre guerra y justicia, los impactos y daños ocasionados por el conflicto armado y las memorias y formas de resistencia de las víctimas. En el capítulo dos, la periodización propuesta por el informe ¡Basta ya! enfatiza en las transformaciones temporales y espaciales de la violencia, en las disputas político-militares entre los actores en contienda y su simultaneidad con las reformas democráticas, y la búsqueda de la paz. En esa medida, las etapas del conflicto armado que propone el ¡Basta ya! tienen como punto de partida la transformación de la violencia bipartidista a la violencia guerrillera (1958-1982). Para ese periodo se describen las continuidades y rupturas entre la violencia bipartidista y la emergencia de los grupos guerrilleros en el contexto del Frente Nacional. Se destacan los intentos fallidos de reforma a la estructura de tenencia de la tierra y la limitada incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el régimen del Frente Nacional, como los asuntos de mayor relevancia.

Un segundo periodo es el denominado de Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996). Allí, como en las otras síntesis, se relacionan los diferentes intentos presidenciales de paz, la emergencia de grupos paramilitares, la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana y la expansión del conflicto a nuevos territorios más articuladas a la vida económica y política de la nación. Al tercer periodo se le denomina como los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005). Allí se describe, cómo en esa etapa la guerra y la violencia alcanzan su mayor intensificación y expansión geográfica y, por tanto, los mayores niveles de victimización contra la población civil. Un periodo en el que, enfatizan los autores, se transformaron sustancialmente las relaciones de los actores armados con la población civil. Finalmente, el cuarto periodo tiene que ver con la negociación y desmovilización de las AUC y el traslado de las FARC hacia sus retaguardias, en razón a la ofensiva estatal que va de 2005 a 2012. De esa etapa, los autores destacan dos dinámicas simultáneas: por un lado, la arremetida contra las guerrillas que se concretó en la política de la Seguridad Democrática; y por otro, el desenlace de la fallida negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD y sus nuevas características.

Conflicto armado en los Llanos orientales.

Desde sus inicios los Llanos orientales han estado ligados a procesos de lucha y resistencia, convirtiéndose en un territorio en continua disputa, por ser un área geográfica que promovía la lucha por el acceso a la tierra. Este panorama de lucha y resistencia llamó la atención de diversas organizaciones armadas que vieron en este territorio un espacio

propicio para su respectiva consolidación y como una zona de refugio y control territorial con fines particulares.

Avelino Rosas.

Sin contar los días bicentenarios en que los Llanos Orientales fueron la retaguardia de los ejércitos patrióticos, ni añadirle al recuento las horas en que las guerras civiles del siglo XIX también enlutaron estas tierras, de quien primero se reseñan sus andanzas en la región es del combatiente liberal en la Guerra de los Mil Días, Avelino Rosas Córdoba (Cauca). Después de defender a muerte a los radicales liberales o de pasar por Cuba, donde acompañó al general Antonio Maceo, el caucano Rosas apareció en el Llano (<https://bit.ly/3guGqHr>).

Se dice que por Santa Elena de Upía organizó dos escuadrones de caballería y sucesivamente obtuvo triunfos en Medina, San Martín, Uribe y Villavicencio. Pasó de largo por el Meta y reapareció después en el Huila en los albores del siglo XX. A su paso dejó un manual sobre la guerra de guerrillas que hizo imprimir en Támara (Casanare) como el Código de Maceo. Cuando murió asesinado en septiembre de 1901 en Puerres (Nariño), al otro lado de Colombia muchos rememorarán su historia de guerra.

La Violencia

Casi medio siglo después, cuando los odios partidistas liberales y conservadores volvieron a encenderse, los Llanos Orientales sintieron de nuevo el rigor de la violencia. Primero fue la policía Chulavita arrasando a su paso con fundos o colonos; detrás llegaron “los pájaros” con ganas de tierras. Los llaneros de a pie se armaron para hacer una revolución liberal (<https://bit.ly/2YyLd4i>).

La Ley de Llano.

Fue la época de la Ley del Llano, proclamada por los guerrilleros liberales que hicieron de la región un fortín inexpugnable (<https://bit.ly/34xYOwQ>). Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Eduardo Fonseca, Bernardo Giraldo, entre otros, así como más de 3.000 hombres y mujeres en armas, después de mucha sangre, depusieron sus armas en las históricas jornadas de septiembre de 1953 en Meta o Casanare, gracias a una Ley de amnistía proclamada en los primeros meses del gobierno militar del teniente general Gustavo Rojas Pinilla.

Cuando cayó el telón de la barbarie de los años 50, ya en la región cobraba forma una futura confrontación de colonos armados. Desde Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Cauca o Valle, huyéndole a la violencia, empezaron a llegar centenares de familias que, atraídas además por planes de colonización promovidos por los gobiernos, poblaron una vasta zona

a lo largo de los ríos Ariari, Meta, Duda y Guayabero. Entre los recién llegados aparecieron muchos de los posteriores guerrilleros de las Farc.

Hacia 1955, cuando el gobierno de Rojas Pinilla declaró ilegal al Partido Comunista, comenzaron las “columnas de marcha” que fueron llevando a la región a centenares de pobladores de zonas con tradición de luchas agrarias. Por eso, cuando en 1964 se anunció la formalización de la guerrilla de las Farc, la cuenca del río Duda fue el epicentro de su expansión. Entre 1969 y 1982, allí mismo, en los límites entre Meta y Huila, tuvieron lugar cinco conferencias de las Farc. Durante años Casaverde, en Uribe, fue su cuartel general.

Cronología del más reciente conflicto armado en los Llanos orientales.

La historia de la violencia en los Llanos Orientales tiene tantos años como el conflicto armado en Colombia. Los primeros vestigios del paramilitarismo tienen fechas cercanas a 1953, cuando desmovilizadas las guerrillas liberales en esa región, el Estado se embarcó en un proyecto para crear bloques antiguerrilleros, que vinculó a exguerrilleros y campesinos a los servicios de inteligencia del Estado y las Fuerzas Militares. Tres décadas después la mezcla explosiva entre el narcotráfico y las esmeraldas convirtieron las extensas llanuras en tierras de disputa en las que tenían amplio poder Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y el esmeraldero Víctor Carranza, a quien hoy todavía los pobladores mencionan en sus relatos de dolor (<https://bit.ly/3aWsiW7>).

La presencia guerrillera que se asentó en la región y el control por las rentas petroleras, la convirtió también en el escenario de una guerra que tuvo sus orígenes a finales de los 80, y de la que fueron protagonistas Héctor Buitrago, alias Tripas; luego su hijo, que llevaba el mismo nombre, pero el alias de Martín Llanos, al mando de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), y Miguel Arroyave (Amalfi, Antioquia), alias Arcángel, Jefe del Bloque Centauros (<https://bit.ly/3hG60dK>).

La mafia¹.

A lo largo de los años 70 y principios de los 80, la guerrilla extendió su presencia en los Llanos Orientales. Sin el mismo despliegue, pero con enorme poder económico, también empezó a hacerlo el narcotráfico. La figura de José Gonzalo Rodríguez Gacha, proveniente del occidente de Boyacá, se hizo notable en muchos municipios llaneros. No sólo como

¹ En la construcción de este análisis ha sido muy importante la lectura del texto Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas campesinas de Meta y Vichada, publicado por el Centro de Memoria Histórica en el año 2018, elaborado por un equipo experto y profundo conocedor del fenómeno paramilitar y de la violencia en la Altillanura, ver en el siguiente enlace electrónico <https://bit.ly/3hG60dK>

comprador a las buenas o a las malas de extensos hatos y tierras, sino porque detrás suyo comenzaron a arribar los paramilitares y, con ellos, la muerte a diestra y siniestra.

La confrontación se hizo inevitable y desde mediados de los 80 la peor parte la llevó la población civil y, particularmente, los líderes o simpatizantes de la Unión Patriótica. Hasta San Martín, Granada, Puerto Lleras, Vistahermosa, El Castillo, Mesetas o Lejanías llegó la mano negra de las autodefensas y los ajusticiamientos y secuestros de la guerrilla. En el río revuelto de la violencia generalizada se consolidaron las bandas que fueron expandiendo el flagelo del narcotráfico.

Para los años 90, mientras la guerrilla replanteaba su poder en los Llanos después de perder su fortín de Casaverde, el paramilitarismo que sucedió a Rodríguez Gacha se desdobló en dos estructuras básicas: el centro del Meta y la mitad inferior de Casanare, a partir del río Cravo Sur, para las autodefensas de Héctor Buitrago, alias Tripas. El norte del Casanare y el resto del Meta para el Bloque Centauros (AUCC), comandado por Miguel Arroyave y Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata.

En medio de estos siniestros personajes, como el zar a la sombra, siempre se movió Vicente Castaño Gil. Su hombre clave en el bloque Centauros fue Daniel Rendón, alias Don Mario, uno de los creadores de los Urabeños. Y como sucedió en buena parte del país, con el cambio de siglo también se les vino la noche a las autodefensas. Divididas frente a la opción de negociar su desarme, persistir en el narcotráfico o capotear la extradición, en el Llano terminaron en una guerra fratricida (entre Centauros y Buitragueños) que dejó más de tres mil muertos.

Violencia contra los indígenas Sikuni.

A finales de la década de 1940, la violencia bipartidista desencadenó el desplazamiento de campesinos desde varias zonas del país hacia los Llanos, interesados en explotar la tierra para la ganadería intensiva. El apuro por tener extensas tierras ocasionó una lucha entre los habitantes de la zona y con el aumento del flujo de colonos, se dispararon los maltratos y abusos contra los indígenas (<https://bit.ly/3hG60dK>).

Entre los años 1950 y 1980 los indígenas de la etnia Sikuni fueron continuamente perseguidos, desplazados y asesinados, al punto en que colonos se reunían para cazarlos en las llamadas “guahibadas”. Esta expresión proviene de la palabra guahibo, término usado por los colonos para referirse a todos los indígenas de la Altillanura y que en la actualidad es considerado ofensivo por las comunidades nativas.

El 26 de diciembre de 1967, colonos en la zona de La Rubiera, en Arauca, acabaron con la vida de dieciséis indígenas Cuivas. Después de invitarlos a comer los atacaron con cuchillos,

escopetas y luego los quemaron. Todo fue una trampa. Los exterminios por temas étnicos se asumían con tanta normalidad que, incluso, se confesaba con naturalidad que no se sabía que matar indios fuera malo.

Durante la década de los 70, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS perpetraron la llamada masacre de la "Jaramillada" en la zona de Planas, una serie de asesinatos, torturas y hostigamientos en contra de varias comunidades sikuani. Episodios crueles de persecución y cacería de indígenas, algunos incluso con la aprobación de autoridades gubernamentales, representaron una etapa más de la guerra por la tierra en el los Llanos Orientales.

Los actores de la violencia.

La violencia en los Llanos orientales en las últimas cuatro décadas ha sido ejecutada por grupos privados al servicio de grandes hacendados, por los paramilitares y organizaciones guerrilleras.

Los grupos paramilitares.

Origen de los paramilitares en los Llanos. Autodefensas orientales.

La historia de las Autodefensas y los paramilitares del Meta, Vichada, Casanare, Arauca, Guaviare y los otros departamentos de los Llanos orientales, se remonta a la primera mitad de los años ochenta, cuando surgieron financiadas por un grupo de boyacenses y cundinamarqueses de origen esmeraldero que compraron tierras en el departamento del Meta y en el norte del Vichada (<https://bit.ly/3hG60dK>).

Inicialmente este grupo se presentó como una organización local, independiente, campesina, desligada del narcotráfico. Desde sus inicios, se apartaron de las AUCC y del Bloque Central Bolívar, conformando un tercer bloque que se llamó Bloque Oriental, integrado por las Autodefensas de Meta, Vichada y las Autodefensas del Sur del Casanare.

En un comienzo el grupo fue denominado por la gente de la region como los 'Carranceros' por su presunta relación con el esmeraldero Víctor Carranza.

Los pasos iniciales. Carranza y el mexicano.

Desde 1984, poderosos esmeralderos como Gilberto Molina y sus socios, Víctor Carranza, Benito Méndez y Juan Vitar, adquirieron grandes cantidades de tierra en el departamento del Meta. El 'Zar de las esmeraldas', Víctor Carranza, compro fincas en El Dorado y Cubaral, Meta. Pero sus propiedades se extendieron hasta el departamento del Vichada (<https://bit.ly/3jdzhwT>).

Hombres de Carranza hicieron presencia en el límite del departamento del Vichada y Meta, participando en la masacre del Porvenir.

En la zona de Vista Hermosa, Meta, el comprador fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano'. A él se le atribuyen los primeros brotes de paramilitarismo en dicho territorio. La mezcla explosiva entre paramilitares, narcotraficantes y fuerzas gubernamentales permitió que Rodríguez Gacha dirigiera el narcoparamilitarismo que buscaba acabar a la izquierda. Esta cacería se extendió sin límites hasta el exterminio de dirigentes del partido político Unión Patriótica en el Meta, entre la década de los 80 y 90 y en complicidad con la elite política llanera de los partidos tradicionales.

Hay claros antecedentes que el ejército de Rodríguez Gacha cometió masacres en contra de la Unión Patriótica (UP), en el Piedemonte Llanero.

Leonidas Vargas.

Otro comprador de grandes extensiones de tierra fue Leonidas Vargas, un capo cercano a Rodríguez Gacha que invirtió en Caquetá, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta (<https://bit.ly/3jdzhwT>).

Este fue el final de una primera etapa de expansión paramilitar, pero los grupos de 'masestos' provenientes del Magdalena Medio, permanecieron en la zona proyectando su dominio territorial e institucional.

Surgimiento de las Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada/ACMV.

La conformación de las ACMV tiene como antecedente directo la aparición y actuación de los Masetos (Mas) en los Llanos Orientales, específicamente las denominadas Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y los grupos de seguridad privada del esmeraldero Víctor Carranza.

Las primeras semillas del paramilitarismo.

Sin embargo, la primera semilla de paramilitarismo en los Llanos Orientales tiene más de medio siglo de historia, como ya lo señalamos, y surgió con la desmovilización de los guerrilleros liberales de los años 50. En 1953, cinco años después de que éstos habían tomado las armas tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, abandonaron su lucha. El gobierno les propuso en ese momento a desmovilizados y colonos que contribuyeran a acabar con el bandolerismo que aún quedaba en las vastas llanuras y permitieran así incorporar esta región a la economía nacional (<https://bit.ly/3aX6QQV>).

Con ese plan, y bajo la orientación ideológica del Manual del coronel Gustavo Sierra Ochoa, el Batallón del Ejército 21 Vargas, dio entrenamiento militar a los campesinos y se propuso crear una fuerza antiguerrillera para atacar núcleos de bandoleros en las incipientes poblaciones de San Martín, Granada, El Dorado, El Castillo y Cubaral.

Conflictos entre grupos de esmeralderos del Occidente de Boyacá. Las guerras verdes y su proyección en los Llanos Orientales.

De otro lado, desde los años sesenta los esmeralderos que se volcaron sobre las tierras de los Llanos orientales, tuvieron en su seno sectores en disputa por el control territorial de los municipios donde se encuentran los yacimientos y el dominio de la explotación de las minas. Los conflictos más conocidos han recibido el nombre de “guerras verdes” por la magnitud de los enfrentamientos, el número de asesinatos que se presentaron y las consecuencias que tuvieron.

Así, la primera guerra verde se produce tras la muerte del líder esmeraldero conservador Efraín González en 1965 y los intentos de otros esmeralderos, como Humberto Ariza e Isauro Murcia, por oponerse al naciente liderazgo de Víctor Carranza y Gilberto Molina, quienes habían conseguido significativo apoyo gubernamental y con esto la adjudicación de varias licencias y concesiones para la explotación de las minas de esmeraldas. Esta guerra finalizó con la captura en 1971 de Humberto “El Ganso” Ariza, quien se había opuesto a la posibilidad de articulación con el Estado para legalizar las grandes fortunas amasadas por los esmeralderos traficantes de las piedras preciosas. La segunda guerra verde se fraguó entre 1975 y 1978, como continuidad de la violencia previa, pues estalló con el asesinato de dos hermanos de “Pacho” Vargas y le siguen otros crímenes relacionados con vendettas heredadas de la primera confrontación, también con hechos de violencia frecuentes que tuvieron lugar en el punto de mercado de esmeraldas de Bogotá, y finaliza en 1978 con la firma del primer pacto de paz entre esmeralderos y la adjudicación de las minas de esmeraldas a particulares.

Luego de que el Gobierno dispuso la explotación mixta y, posteriormente, la concesión de las minas como mecanismo regulador de la explotación minera en la zona, se produjo un proceso de diferenciación entre esmeralderos. Los que se incorporaron al orden de explotación definido por el Estado adquirieron el estatus de empresarios legales, mientras que otro sector de los esmeralderos, el de los emergentes, conservó su estatus ilegal e informal. Esto determinó un cambio en las dinámicas entre los esmeralderos legales e ilegales del occidente de Boyacá que derivó en la tercera guerra verde.

Los conflictos que activaron el tercer enfrentamiento, el más significativo por los niveles de violencia que generó, se produjeron por desacuerdos en los turnos de las minas de Coscuez

entre las familias Barrera García y las familias López Gualteros y Castellanos, dedicadas a la minería ilegal, pero con alianzas con empresarios esmeralderos legales. El inicio de los enfrentamientos hizo que las familias extensas del occidente de Boyacá estableciesen alianzas que derivaron en bandos en contienda. Esta guerra estuvo marcada por la participación de Gonzalo Rodríguez Gacha, en apoyo a Gilberto Molina. Al comienzo, Gilberto Molina y Rodríguez fueron aliados, pero posteriormente terminaron enfrentados a muerte. Los desacuerdos con Molina llevaron a Rodríguez Gacha a aliarse con el bando de Coscuez. El escalamiento de la guerra entre los diferentes actores legales e ilegales favoreció la violencia generalizada en contra de quienes integraran uno u otro grupo. En el marco de estos hechos sucedió el homicidio de Gilberto Molina y de 19 personas más que se encontraban con el esmeraldero en una finca de descanso ubicada en el municipio cundinamarqués de Sasaima, el 27 de febrero de 1989. Por otra parte, la muerte de Rodríguez Gacha se produce el 16 de diciembre del mismo año, lo que finalmente desalienta la violencia en el occidente de Boyacá. De inmediato, Víctor Carranza, considerado desde entonces como “el zar de las esmeraldas”, buscó un acercamiento con los bandos contrarios, y con la intermediación de la Iglesia católica consiguió un acuerdo de paz.

El fin de la tercera guerra verde abrió otro capítulo más en la historia de las guerras narco-para-esmeralderas: el enfrentamiento violento entre los dos grupos más poderosos vinculados al negocio de las esmeraldas, al narcotráfico y con poderosos y bien entrenados ejércitos paramilitares, bajo la fachada de vigilantes en empresas de seguridad privada.

Se consolida poder de Víctor Carranza.

Las “guerras verdes” constituyen antecedentes de la organización de las ACMV porque, por una parte, sus resultados, fundamentalmente los de la Tercera Guerra Verde, contribuyeron a la consolidación de la figura de Víctor Carranza como zar de las esmeraldas y como máximo referente de esta economía, que a la postre le permitió tener acceso a suficientes recursos económicos y políticos para afianzar sus proyectos productivos en los Llanos orientales.

Del Magdalena Medio a los llanos orientales. Los Masetos.

Tras la creación del MAS (Muerte a Secuestradores) en 1981, como grupo de sicarios del Cartel de Medellín para perseguir guerrilleros y a sus familias y amigos, acusados del secuestro de Nieves Ochoa, del Clan de los Ocho, aparecieron organizaciones como los Masetos, principalmente en el Magdalena Medio (Henry Pérez, Meneses, Isidro Carreño) y en los Llanos Orientales. Emulando los objetivos del Más, estos grupos representaban la alianza entre narcotráfico, fuerza pública y terratenientes (<https://bit.ly/3aX6QQV>).

Años 80.

A comienzos de 1980, los procesos de formación y de reinvención del paramilitarismo fueron muy dinámicos. En principio, las zonas de influencia de la organización paramilitar originaria de Puerto Boyacá se restringían a la región del Magdalena Medio y a zonas aledañas y para finales de esa década, esa organización ya estaba presente en distintas zonas del norte y sur del país. A pesar del antagonismo que había entre los principales empresarios esmeralderos y Rodríguez Gacha, los tres tenían un enemigo común que eran las FARC (<https://bit.ly/34wQUnp>).

El grupo de Víctor Carranza instauró su asentamiento entre Puerto López y Puerto Gaitán, hasta límites con el Vichada, y para su conformación trajo mercenarios israelíes, uno británico y otro australiano. Se acompañó de Ariel Otero, ex oficial del Ejército, quien había desarrollado las estructuras paramilitares del Magdalena Medio de Henry Pérez.

Esta relación entre la estructura de Puerto Boyacá y Los Carranceros se evidencia en el uso indistinto de denominaciones como Carranceros o Masetos, lo cual supone que para la gente hacían parte de un mismo grupo o respondían a un mismo fin.

Los Carranceros.

Los Carranceros/ACMV perpetraron asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, tanto contra abigeos o grupos delincuenciales que atentaban contra las haciendas, como contra supuestos colaboradores de la guerrilla y líderes políticos y sociales de izquierda organizados en la UP.

Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, fue su jefe o comandante, reconocido por su relación cercana con Víctor Carranza, de forma que distintas fuentes afirman que era su representante o intermediario para distintos efectos (<https://bit.ly/34wx20>).

El periodo de 1989 a 2005.

Las ACMV/Carranceros (Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada) actuaron por un periodo cercano a 15 años en la zona nororiental del Meta y en el occidente y norte del Vichada. Durante este tiempo cambiaron su denominación, su composición, y las valoraciones de la población sobre su accionar en los lugares donde hicieron presencia.

Las zonas de actuación de las ACMV se distribuyen a lo largo de la frontera entre los departamentos de Meta y Vichada, en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta; y La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo, Puerto Carreño, en el Vichada; también se registró presencia esporádica en Casanare, específicamente algunos sitios de frontera, en inmediaciones del río Meta. La presencia de este grupo paramilitar no se dio en la totalidad del territorio de estos municipios, en algunos casos se redujo a haciendas o lugares de

tránsito, cruces viales o puertos de ríos. Esta característica de la ocupación territorial se produjo por varias razones: otros grupos paramilitares (Bloque Centauros y Autodefensas Campesinas del Casanare) y grupos guerrilleros (Frentes 16 y 39 de las FARC) hacían presencia en la región; adicionalmente influía la extensa área de estos municipios; y el escaso número de personas que integraron las ACMV, y las necesidades operativas del grupo paramilitar. Sin embargo, lograron controlar lugares claves, mediante la instalación de retenes en carreteras y planchones, lo que permitió ejercer control social en buena parte del territorio (<https://bit.ly/3hG74hK>).

Este grupo paramilitar operó en un área muy extensa (cerca de 9 millones de hectáreas), de escasa densidad demográfica y con actividades económicas extensivas (como la ganadería, la agroindustria y el narcotráfico), lo que contribuyó a su forma de hacer presencia en el territorio. Por tanto, sus maniobras, tanto bélicas como de relacionamiento con la población civil, variaron de acuerdo con las características geográficas (sabana o selva), el tipo de presencia (permanente o esporádica), los movimientos espaciales (reconocimiento, incursión o control) y los mecanismos de financiación (apoyo de actores económicos de la región, narcotráfico, entre otros).

La reunión de Puerto Lopez en 1993.

En 1993, el grupo de Carranza se recompone como ACMV, después de una reunión llevada a cabo en La Hacienda las Margaritas, ubicada en la vereda Chaviva de Puerto López, en la que políticos, militares y narcotraficantes de la Altillanura y provenientes de Puerto Boyacá y Chivor, decidieron conformar un grupo conjunto de autodefensas, realmente estructura paramilitar, que articulara sus intereses económicos y políticos. De esta manera, las ACMV empezaron a operar con mejor armamento, adoptaron de forma permanente el uso de uniformes e insignias, aumentaron los índices de reclutamiento e implementaron una organización más jerárquica de la estructura. A esto se suma posteriormente la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1996, que incursionaron en los Llanos Orientales con la intención de consolidar el proyecto paramilitar a nivel nacional, llamado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A partir de allí, las ACMV realizaron acciones coordinadas con las ACCU, y otros grupos paramilitares de los Llanos Orientales, como las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el recién conformado Bloque Centauros (BC). Estas acciones conjuntas se iniciaron con la masacre de Mapiripán, y continuaron con otras masacres en áreas rurales de Puerto Gaitán y otros municipios, entre 1996 y 1999 (<https://bit.ly/3hG74hK>).

El análisis de lo ocurrido evidencia que los paramilitares no se caracterizaron ni redujeron su actuación a una forma de autodefensa, sino que desplegaron una estrategia de control territorial, incursión en nuevas zonas con acciones de violencia contra pobladores y

determinados sectores sociales y poblacionales, dinámicas de articulación y alianza con diversos sectores, bajo un discurso contrainsurgente. La estructura paramilitar buscaba justificar el uso de violencia extrema contra civiles como su modo principal de actuación, como supuesta forma de combatir a la guerrilla. En contraste, se evidencia que de forma notoriamente menor las ACMV llegó a tener en algunas zonas esporádicas confrontaciones con la guerrilla, de forma que contaron en tal contexto con formas de apoyo de determinadas estructuras de la fuerza pública y de ciertas autoridades gubernamentales y estatales.

Victimización de la población civil.

Sus actuaciones se correspondieron ante todo con victimizaciones contra la población civil a través de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual, principalmente realizadas en zonas con presencia guerrillera. Este tipo de expansión cobró vigor los primeros años de la década del 2000, pues el auge de la economía cocalera en la región y el control de mayor volumen de territorio le reportó a las ACMV la entrada de importantes recursos provenientes del narcotráfico.

Comandancia de Guillermo Torres.

José Baldomero Linares, conocido con el alias de Guillermo Torres, aparece a mediados de la década de los noventa en los relatos sobre el surgimiento de las ACMV. Linares toma el nombre de Guillermo Torres, un administrador de Víctor Carranza que murió en esa época con mucho reconocimiento entre la población local (<https://bit.ly/2CWvSTE>).

En 1992, Linares es capturado y sentenciado por porte ilegal de armas, delito por el cual permanece en la cárcel 22 meses. Al salir de prisión en 1994 se desplaza a Puerto Gaitán, en donde funda el Bloque Meta, que sería conocido posteriormente como las ACMV.

El 18 de noviembre de 1994 Linares fundó, en la Inspección El Porvenir de Puerto Gaitán, el grupo denominado Autodefensas del Meta o Bloque Oriental, que se denominaría posteriormente Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada.

Las ACMV contaron con comandancias más o menos estables desde el momento de su creación hasta su desmovilización. El comandante general desde el inicio fue Guillermo Torres, seguido por distintos comandantes que se dividían por zonas o funciones. Sin embargo, los que estuvieron desde 1994 hasta 1996, fueron personas provenientes de Puerto Boyacá, quienes salieron, tras el fortalecimiento de la organización.

Los lugares específicos en donde se concentró la presencia del grupo fueron la inspección El Porvenir, La Línea, Puente Arimena, San Pedro de Arimena, San Miguel, Los Kioskos y La Cristalina, todos estos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán.

De 1994 a 1996 este grupo paramilitar se caracterizó por la prolongación del modelo de Los Carranceros. De esta manera, se continuó la violencia contra quienes eran considerados como un riesgo para la propiedad privada y la acumulación de capital y tierras, que eran señalados por ser de izquierda o comunistas.

San Teodoro, lugar de presencia permanente en Vichada.

Con la llegada de “101”, (un alto oficial antinarcóticos de la Policía que se sumó al paramilitarismo), aumentaron de forma considerable los recursos del grupo y, en consecuencia, su capacidad de operación. Esto se reflejó en la ampliación de los lugares de presencia permanente en el Vichada, por ejemplo, en San Teodoro, punto del mercado de la base de coca. Allí, mediante la comisión de la masacre de mayo de 1999, establecieron mecanismos de control y regulación hacia la población civil relacionada con el narcotráfico (<https://bit.ly/2CWvSTE>).

San Teodoro, en el municipio de La Primavera, es un pequeño pueblo que no sobrepasa las 20 casas, ubicadas a lado y lado de una vía sin pavimento.

La historia de este pueblo es clave para entender la evolución de la violencia y el conflicto armado en este departamento. En 1992 los campesinos de esta zona de la Altillanura decidieron fundar una inspección de Policía que les permitiera registrar las compras de ganado sin necesidad de hacer el interminable viaje al casco urbano de La Primavera. Escogieron un punto clave sobre una trocha que conectaba la carretera principal hacia Puerto Carreño, la capital de la región en el extremo del departamento, con las tierras más al sur, en las que la sabana se funde con los primeros parches de selva.

La guerrilla se resistió a abandonar la región y también ejecuto varias acciones contra quienes consideraba aliados de los paramilitares y la fuerza pública. En enero de 2000, el Frente 16 realizó una violenta toma del casco urbano de La Primavera, en la que saqueó la Caja Agraria, destruyó la estación de Policía, asesinó a un agente y dejó otros tres heridos.

Conformación de la Unidad Especial de las ACMV.

El fortalecimiento de las finanzas derivado del narcotráfico implicó el aumento del número de integrantes de las ACMV y la cualificación de una unidad paramilitar, denominada URE (Unidad de Reacción Especial).

Escuelas de entrenamiento.

También se adelantó la organización de una infraestructura política con escuelas de entrenamiento y adoctrinamiento, en tres lugares específicos ubicados en Puerto Gaitán, en donde se desarrollaban los entrenamientos. Uno de ellos es la Finca Brasil, que funcionó a partir de 1998 como un espacio destinado para el entrenamiento militar y para el empleo de formas de violencia (<https://bit.ly/2CWvSTE>).

Otros sitios conocidos fueron la finca La Cristalina y la finca El Pílon, ubicados al suroriente del casco urbano de Puerto Gaitán. Se identificó una escuela móvil llamada La 28, localizada en cercanías a una carretera destapada también en el municipio de Puerto Gaitán.

ACMV y seguridad a la Hacienda.

A partir de lo anterior se observa en las ACMV su interés de proveer seguridad a grandes economías como la ganadera en oposición a las acciones de los grupos guerrilleros. Enseguida se evidencia claramente la raigambre de la estructura basada en la relación con los grandes hacendados de la región, lo cual se relaciona con el discurso que caracteriza a las ACMV como un grupo que busca la seguridad económica de la región, puesta en riesgo por la presencia de grupos guerrilleros (<https://bit.ly/2CWvSTE>).

Las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada dejaron por lo menos 800 víctimas en los Llanos Orientales, según el registro de la Fiscalía 59 de Justicia y Paz. El grupo se desmovilizó el 6 de agosto de 2005 en la finca La María, en Puerto Gaitán, con 209 integrantes.

Bloque Centauros.

Implantación del modelo paramilitar de las ACCU (1996-1999).

Miguel Arroyave, alias Arcángel, que llegó a los Llanos orientales junto a Daniel Rendón, alias 'Don Mario', también narcotraficante, ambos oriundos de Amalfi, querían controlar el narcotráfico en los Llanos, cobrar millonarias extorsiones y arrebatarle el control del Guaviare, sus cultivos de coca y sus laboratorios a las Farc (<https://bit.ly/3lkYJmb>).

Con Arroyave el saqueo a la economía llanera fue sistemático. Fueron pocos los puestos políticos donde no metió la mano: gobernadores, alcaldes y concejales aceptaron pactos, dinero o fueron intimidados por Arroyave y su tropa. La lista de condenados, investigados o salpicados es larga. Casi todos los gobernadores o candidatos a serlo quedaron en entre dicho por su cercanía a este bloque paramilitar, entre ellos, Edilberto Castro, Eusser Rondón (qepd), Nebio Echeverry, José Alberto Pérez, Miguel Ángel Pérez, Óscar de Jesús López Cadavid y William Pérez Esquivel.

El crecimiento del Bloque Centauros se hizo más evidente en 2001, cuando llegaron al norte de Casanare y lograron sacar a la guerrilla de Paz de Ariporo, Aguazul, Nunchía y Támara.

Pero no sólo persiguieron guerrilleros, extorsionaron finqueros y mataron dirigentes políticos y líderes comunitarios. Los Centauros también se enfrentaron en una batalla campal con la Acc de 'Martin Llanos' que dejó una cifra grande de muertos que hoy la justicia calcula en mil quinientos jóvenes.

Arroyave ganó esa batalla y consiguió el dominio de casi todo el Meta. Pero su reino no duró mucho. Por su resistencia a desmovilizarse junto con los demás miembros de las autodefensas que negociaron con el gobierno Uribe la dejación de armas, Arroyave, fue asesinado por sus propios hombres el 19 de septiembre de 2004 en Casibare, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta, muy seguramente por orden de los Castaño.

El Bloque Centauros se dividió entonces en tres facciones: una al mando de 'Pirata', la segunda al mando de 'Cuchillo' y la última, que era la más grande cuantitativamente, liderada por alias 'Mauricio'.

El Frente Meta, la 'célula' del Centauros

El Bloque Centauros tuvo ocho tentáculos. El primero de ellos fue el Frente Meta, que tuvo su base en San Martín. Se llamaron Autodefensas de San Martín y según las confesiones de Jorge Humberto Victoria alias 'Don Raúl', un capitán retirado del Ejército cómplice de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, este grupo fue contactado por los paramilitares del Urabá para que les ayudaran a incursionar los Llanos. Esa incursión fue en julio de 1997, cuando 80 paramilitares de la Casa Castaño llegaron hasta San José del Guaviare, Guaviare, y se movilizaron hasta Mapiripán, Meta, donde cometieron una masacre (<https://bit.ly/3lkYJmb>).

El Frente tuvo como jefe general a 'Don Raúl', como jefes militares a 'Eduardo 400' y a Luis Omar Marín alias 'Matías' y como jefe de finanzas a Jesús Emiro Pereira alias 'Huevo de pisca'. Los paramilitares llegaron al Llano para combatir a los Frentes 27, 31, 43 y 44 de las Farc.

El Frente Meta fue la columna vertebral del Bloque Centauros.

El grupo aumentó la tropa creando cuatro contraguerrillas: Las Águilas a cargo de 'El teniente César'; La Pica-Piedra, de Éder Luis Martínez alias 'Babillo'; Cobra a cargo de Edilson Cifuentes alias 'Richard' y Dragones, a cargo de Melquisedec Henao alias 'Belisario'.

Entre 1998 y 1999 el Frente envió un grupo de 'urbanos' para tener presencia en Villavicencio, y reforzó otro grupo de 'urbanos' en San Martín a cargo de Luis Árlex Arango alias 'Chatarro'.

Expansión de los Centauros.

Entre 2000 y febrero de 2002, el grupo creció con tres estructuras: la del Meta, la del Guaviare y la de Paratebueno (Cundinamarca), cada una con 120 hombres.

En Paratebueno nació el Frente que luego se llamó Pedro Pablo González, cuyo nombre era el del jefe militar de ese grupo, alias 'Puño', quien murió en un enfrentamiento con el Gaula en junio de 1999 en Barranca de Upía, Meta (<https://bit.ly/3lkYJmb>).

Cambios en 2002.

En febrero de 2002, el Bloque Centauros cambió de jefes y el Frente Meta también. Para esa fecha el narcotraficante Miguel Arroyave alias 'El Arcángel', tras su salida de la cárcel Modelo de Bogotá, llegó a los Llanos Orientales y por orden de Vicente Castaño se impuso por encima de alias 'Don Raúl'.

Los nuevos Jefes.

Daniel Rendón Herrera alias 'Don Mario' fue designado jefe de finanzas; Manuel de Jesús Pirabán fue nombrado jefe militar; José Eleazar Moreno como 'El Político' y Teodosio Pabón alias 'El Profe' como el ideólogo. El Frente Meta quedó en cabeza de Arley Úsuga Torres alias 'El Zarco' (<https://bit.ly/3lkYJmb>).

Nuevos grupos.

Financiándose con impuestos al 'gramaje', al narcotráfico, el Frente Meta tenía suficientes hombres como para crear en 2003 otros dos grupos: El Frente Hernán Troncoso a cargo alias 'Chatarro' en Lejanías, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Lleras y La Uribe; así como el Frente Ariari a cargo de Mauricio de Jesús Roldán alias 'Julián' en Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa, El Dorado, El Castillo, San Martín, Granada, así como Puerto Rico y Mapiripán.

La masacre de Mapiripán.

La llegada de los Castaño a los Llanos Orientales estuvo signada por la comisión de masacres, con propósito aleccionador contra la población civil de los lugares considerados como "pueblos guerrilleros". El hecho que marcó la entrada de las AUC fue la masacre de Mapiripán ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, que se inscribe en esta modalidad de violencia, característica de las acciones conjuntas de los grupos paramilitares de los Llanos Orientales. La masacre de Mapiripán fue producto de la coordinación logística de los grupos paramilitares que ya estaban en la región, la cual tendría continuidad para la ejecución de otras operaciones similares en otros lugares de la Altillanura. De este modo, las acciones conjuntas, caracterizadas por el uso indiscriminado de la violencia, fueron una particularidad de los grupos paramilitares en los Llanos Orientales, que favoreció un

ambiente de estigmatización generalizada contra la población civil y posibilitó la expansión de la presencia paramilitar en esta parte del país. Los diferentes grupos paramilitares de los Llanos pusieron a disposición de los recién llegados sus recursos, tanto humanos como operativos, para la comisión de la masacre, mientras que los representantes de las ACCU ofrecieron como prerrogativa sus imponentes recursos económicos, expresados en armas y avituallamiento (<https://bit.ly/32pjRPs>).

La masacre de Mapiripán fue la síntesis de las relaciones entabladas entre personajes de los Llanos Orientales con líderes paramilitares de Urabá, con el propósito de instaurar un proyecto paramilitar nacional.

Otras incursiones de las ACCU

A partir de la masacre de Mapiripán se hicieron otras incursiones en la región que involucraron a todos los grupos paramilitares de los Llanos: Los Buitragueños, Los Centauros y Los Carranceros. En el marco de estas acciones conjuntas, las ACMV estuvieron involucradas en la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamiento forzado, particularmente al sur del municipio de Puerto Gaitán y en Vichada.

Desde entonces en la región crecieron el número de masacres atribuidas a los paramilitares. Entre las que se encuentran Callo Blanco (24 de noviembre de 1997), Puerto Alvira (4 de julio de 1998), Planchón (15 de julio de 1998), Lejanías (25 de septiembre del 2008) y Picota (6 de julio de 1998 y 5 de noviembre de 1998).

Reconfiguración territorial.

Todo esto produjo una reconfiguración territorial que delimitó las zonas de cada uno de los grupos paramilitares, principalmente en el Meta.

La confrontación con las Farc.

La llegada de las ACCU y las acciones conjuntas de todos los grupos paramilitares de la región favorecieron la disputa territorial de las ACMV con los frentes de las FARC presentes en las veredas Tillavá y Rubiales, pues tanto los recursos humanos y económicos, como la reputación violenta y de sevicia de Los Urabeños marcaron un impacto significativo en esta confrontación. En consecuencia, las ACMV ampliaron considerablemente su territorio, primero, a partir de las incursiones coordinadas y, después, por medio del control y de la regulación que favorecieron la continuidad de la estigmatización social.

Procesos de reorganización de Centauros.

Desde su conformación, el Bloque sufrió tres reorganizaciones, la primera ocurre entre los años 1997 y 1998 cuando entra la comisión paramilitar de la casa Castaño, y concilian con los grupos de autodefensa existentes el control territorial y el proyecto mismo de las AUC. La segunda sucede en el año 2002, cuando Arroyave compra el Bloque. En ese momento aparecen las primeras tensiones dentro de las organizaciones paramilitares por las condiciones y métodos impuestos por el nuevo comandante. La tercera reorganización del grupo ocurre tras la guerra con las ACC y luego de la muerte de Arroyave, cuando el Bloque resulta dividido en tres facciones y finalmente se presentan las desmovilizaciones.

Cuchillo', Pedro Oliveiro Guerrero.

Cuchillo, fue el jefe paramilitar del Frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros y líder de una banda de narcotraficantes que opero en Guaviare, Vichada y Meta. Se convirtió en uno de los hombres más buscados del país hasta que fue abatido por la policía en 2010.

“Cuchillo” formó el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac) en las áreas rurales de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta.

Ingreso al Vichada.

El bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave, entró al departamento de Vichada en 1997 con el propósito de disputarle a las Farc las zonas cocaleras y, siguiendo la orden de la casa Castaño, de unificar varias estructuras que existían previamente en el Meta y Guaviare.

La guerra entre Centauros y las AC.

La guerra entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del Casanare influyo en la violencia paramilitar registrada en el Meta a principios del siglo XXI (<https://bit.ly/2FUAEvH>).

A finales de 2003 y mediados de 2004 ambos bandos se declararon la guerra. Mientras Los Centauros enviaron a la mayoría de sus integrantes al municipio de Barranca de Upía, en el Meta, los Buitrago lo hicieron en el municipio de Villanueva, Casanare.

Aunque no hay una cifra oficial relacionada con el número de muertos, los paramilitares calcularon que fueron 2 mil, cuyos cuerpos fueron cargados en “zorras” halados por tractores y desaparecidos en fosas. José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’, quien fue jefe paramilitar en el municipio de Aguazul, en Casanare, aseguró que para esa guerra fueron reclutados muchos niños y que en su caso reclutó a 30 de un solo tajo en la Semana Santa de 2004.

Esta guerra incluso trascendió a la capital colombiana. Los Centauros crearon el Frente Capital y Los Buitragueños el Frente República para saber cuál de los dos bandos ganaba el pulso de las extorsiones en los barrios populares, el comercio y las plazas de mercado en Bogotá.

El apoyo de otros bloques paramilitares.

Cuando Los Centauros se vieron ‘alcanzados’ en hombres y la posibilidad de perder la guerra, pidieron el apoyo de los demás tentáculos de las Auc como el Calima, el Bloque Central Bolívar, el Norte, el Vencedores de Arauca y el Mineros. Así las Autodefensas Campesinas del Casanare fueron desvertebradas, los Buitrago, padre e hijos, huyeron y 79 de sus hombres fueron muertos. Otros 120 paramilitares bajo el mando de ‘Martín Llanos’ fueron presos. Todo sucedió mientras las Auc negociaban su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Después de esta guerra ‘Don Mario’ se escabulló hacia el Urabá buscando el apoyo de su hermano para después impulsar la banda criminal ‘los Urabeños’ junto a Juan de Dios Úsuga David alias ‘Geovanny’, quien fue muerto en 2012 en un operativo de la Policía, y a Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’, quien sigue libre.

‘Cuchillo’, quien se desmovilizó, se rearmó en el Guaviare y a punta de ‘cocinas’ hizo crecer a la banda que bautizó como Erpac. Murió en un operativo en diciembre de 2010 y la mayoría de sus hombres se entregó a la Fiscalía un año después. Aunque ‘Don Mario’ le juró a la justicia que él no seguía delinquiendo desde el pabellón de máxima seguridad de La Picota y que por el contrario, fue uno de los exjefes paramilitares más dispuestos a confesar sus crímenes en Justicia y Paz, los investigadores siguieron sospechando y encontraron que seguía siendo la sombra de ‘los Urabeños’. Por eso fue expulsado del proceso de Justicia y Paz en septiembre de 2013 y un año después la Corte Suprema avaló su extradición. En Colombia, ‘Don Mario’ dejó tres pistas para esclarecer el conflicto en los Llanos: la ‘parapolítica’, el despojo de tierras y el rearme.

Fin de la guerra y participación de militares.

La guerra entre las ACC y el Bloque Centauros finalizó a mediados de 2004 con la derrota de las ACC, favorecida por la participación del Ejército y la Fuerza Aérea, en la denominada Operación Santuario (<https://bit.ly/2FUAevH>).

La Operación Santuario fue ordenada por el general Martín Orlando Carreño, comandante del Ejército, en el primer semestre de 2004 y a pesar de que esta operación se dio en el marco de la guerra entre los grupos paramilitares, sus acciones se dieron en contra de las ACC. El presidente Álvaro Uribe, en una visita al departamento del Meta, ordenó pública y

directamente en un Consejo Comunitario emprender el operativo militar. El general Justo Eliseo Peña, comandante de la XVI Brigada del Ejército, lideró estas acciones. En septiembre de 2004, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informó sobre el golpe estratégico propinado a las ACC: Un total de 236 miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) han quedado fuera de combate (entre abatidos, capturados y desmovilizados), durante los últimos días como resultado de la presión ejercida por el Ejército Nacional en los departamentos de Boyacá y Casanare.

Desmovilización de los Centauros.

En septiembre de 2005, en el corregimiento de Tilodirán, a media hora de Yopal, se desmovilizaron 1.135 hombres del Centauros.

Autodefensas del Casanare. Los Buitragueños.

Al Casanare llegó, Héctor Buitrago, boyacense oriundo de Páez, municipio en el piedemonte llanero, también apodado 'El Viejo, a levantar ganado. Después de matar a dos guerrilleros que llegaron a extorsionarlo, abandonó su finca La Sombra con varios de sus hombres. Luego, fueron entrenados y organizados en un grupo de autodefensa por paramilitares que viajaron del Magdalena Medio, financiados por Rodríguez Gacha. A su ejército irregular llegaron otros aliados de esta amalgama narco-esmeraldera: los hermanos Víctor, José y Omar Feliciano y Jaime Matiz Benítez (<https://bit.ly/3guCHte>).

Héctor Buitrago, que como se dijo, vino de Boyacá al Casanare y había fundado su pequeño grupo de autodefensa, se alió luego con 'El Mexicano', se convirtió en los noventa en un gran hacendado y jefe fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Este era el capítulo local de las Autodefensas de los hermanos Castaño, que habían sellado una alianza desde 1994.

Las ACC de Martín Llanos se rompen con la masacre de 11 integrantes de una comisión judicial, el 3 noviembre de 1997 en San Carlos de Guaroa (Meta), por orden de Héctor Buitrago y Jaime Matiz. Buitrago fue rápidamente capturado y las Accu de los Castaño rompieron con él y ordenaron el fusilamiento de Matíz.

Al mando de las ACC quedaron los hijos de Buitrago, Héctor, más conocido por su alias de 'Martín Llanos' y Nelson Orlando Buitrago, alias Caballo.

'Martín Llanos' fue a Santa Fe de Ralito como representante de las autodefensas del Llano, pero nunca se desmovilizó.

Los Macacos.

Para hacer más compleja la situación de violencia en los Llanos, a la zona llegó un cuarto grupo paramilitar que marcaría el claro interés de los actores ilegales por la propiedad de las extensas tierras de la Altillanura. En 2004, Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', un narcotraficante que había comenzado su carrera con el cartel del Norte del Valle y que terminó asumiendo como el principal jefe 'para' del llamado Bloque Central Bolívar (<https://bit.ly/34E5nhv>).

El grupo de 'Macaco' delinquiró como un brazo más de la Casa Castaño en el proceso de expansión paramilitar en 1999, pero luego se convirtió en una especie de disidencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de que Carlos Castaño insistiera desde el año 2000 en que los 'paras' debían abandonar el narcotráfico. 'Macaco', con el respaldo de Vicente Castaño, tomó el Bloque Central Bolívar y comenzó su propio proceso de expansión creando bloques y frentes para sumarse a la disputas en las zonas claves para el narcotráfico. Así, con la excusa de apoyar a los hombres del Bloque Centauros en guerra con los 'Buitragueños' terminó creando el Frente Vichada en el municipio de Cumaribo.

La llegada de este grupo paramilitar marcó un momento importante en la historia de la propiedad de la tierra en la Altillanura. Como ha podido documentar la Fiscalía y el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 'Macaco' vio en esas tierras, al igual que los narcotraficantes de los ochenta y los esmeralderos, una gran oportunidad de negocio y terminó despojando a campesinos para quedarse con sus fincas, además de ayudar a políticos como el excongresista Habib Merég de Risaralda, para que se apropiaran ilegalmente de esas tierras sin dueño, o por lo menos sin documentos que acreditaran la propiedad.

Al final de la guerra con los 'Buitragueños', los hombres de Macaco se quedaron en la zona, junto a los Centauros y los 'Carranceros'.

El Frente Vichada del BCB estuvo comandado por Sucreño, quien lideró las escasas participaciones del grupo en los combates entre las ACC y el Bloque Centauros, así como las incursiones al Vichada que se realizaron a finales de 2004 e inicios de 2005.

El Frente Vichada del BCB estuvo compuesto por personas provenientes de Antioquia y de la Costa Atlántica, lo cual les dificultaba la movilidad porque desconocían la región.

Este Frente aún mantiene su presencia como Héroes del Vichada y sus vínculos con empresarios y políticos del Valle del Cauca y Eje Cafetero sigue vivo.

Bloque Vencedores Arauca.

El Bloque Vencedores de Arauca tiene como origen la voluntad de Carlos Cataño, en el año 2000, de disputarle el control territorial que sobre Arauca se repartían el Bloque Oriental de las FARC, y buena parte del ELN. La tarea de comandar la creación del paramilitarismo recae, en esta ocasión, en los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía, conocidos como “Los Mellizos”. Hermanos que según versiones libres al amparo de Justicia y Paz, compraron la estructura paramilitar por cinco millones de dólares. Inicialmente, el bloque surge con 200 combatientes, de los cuales la mitad fueron reclutados en el municipio de Barranca de Upía y la otra parte provenía de parte del BC. El grupo va a operar hasta diciembre de 2005, y focaliza sus acciones de extorsión, despojo y narcotráfico en torno a los municipios urbanos de Saravena, Tame, Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón, y en los enclaves urbanos de Hato Corozal, Tame, Arauca, Arauquita y Puerto Rondón. Su mayor impacto se da entre 2002 y 2004, cuando coincide un incremento exponencial en las tasas de desplazamiento forzado si bien, a diferencia del resto de enclaves descritos, en este caso, permanecen bajo una tendencia expansiva que abarca hasta 2006 (<https://bit.ly/3ll0ccb>).

El BVA va a protagonizar, especialmente en Arauca, Saravena, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, y a lo largo de los años 2002, 2003 y 2004, un total de 11 masacres que se tradujeron en 87 víctimas mortales.

Es decir, los mayores años de activismo paramilitar coinciden con un mayor número de acciones guerrilleras pero.

El Mellizo Mejía entro al departamento de Arauca por orden directa de Vicente Castaño en el 2000, como jefe del bloque Vencedores de Arauca, el 7 de agosto del 2001 con 200 hombres que le envió Castaño y otros 200 pagados por él.

‘El Mellizo’ aseguró haber tenido lazos directos con las Fuerzas Armadas en Arauca donde afirma haber actuado en complicidad con algunos políticos del departamento, entre ellos Julio Acosta Bernal, ex gobernador de Arauca y Alejandro Guzmán, ex alcalde de Tame.

Los métodos de los grupos paramilitares.

Los grupos paramilitares mencionados en este texto, dominaron en gran parte de la región de los Llanos Orientales y ocasionaron graves y masivas violaciones a los derechos humanos, relacionadas con victimizaciones como asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento ilícito o forzado, entre otras. Las formas de actuación, así como los patrones de victimización de estos grupos tuvieron rasgos comunes, pero también características diferenciadas, dependiendo de donde estuvieran ubicados. Los factores geográficos, económicos, demográficos, la presencia institucional, las dinámicas del

conflicto armado y sus actores, entre otros, influyeron en las formas de actuación de los grupos paramilitares y su relación con la población civil.

Modos de violencia empleados. Patrones de violencia.

El repertorio de la acción violenta de los paramilitares incluye: masacres; asesinatos selectivos; desaparición forzada; violencia sexual; tortura; reclutamiento ilegal y desplazamiento forzado.

Las masacres sobresalen en su uso y efectividad como instrumento de terror entre la población llanera.

Masacres.

Las masacres son una de las modalidades de violencia más usadas por los grupos paramilitares y neoparamilitares en el país; no se tipifican dentro de los instrumentos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario y con frecuencia se denominan asesinatos colectivos o múltiples, lo cual se desprende de las definiciones sociológicas y de las interpretaciones normativas que se han hecho sobre ellas. Sin embargo, no solo están enmarcadas en la comisión de asesinatos; de hecho, una de sus principales características es la teatralización de la violencia. Por tanto, incluye la simultaneidad con otras modalidades y la intención manifiesta de exponer su intensidad en contextos de irrupción. El informe ¡Basta ya! afirma que durante la década de 1990, etapa expansiva del paramilitarismo, las grandes masacres marcaron la irrupción de este grupo armado en un territorio; los paramilitares incorporaron decisivamente el recurso a la sevicia en sus acciones de violencia y con ello amplificaron su potencial de humillación y daño. Las masacres fueron usadas en los sitios considerados como de retaguardia de la guerrilla, donde los civiles eran acusados de componer la base social de este grupo armado y, por tanto, considerados por los paramilitares como objetivo militar, lo que es, a la luz del DIH, un desconocimiento obvio de la distinción fundamental entre combatiente y población civil. Desde la perspectiva paramilitar, la comisión de la masacre tenía una pretensión aleccionadora, mediante la cual se buscaba evidenciar las consecuencias del supuesto apoyo a los grupos guerrilleros y por ello, las principales víctimas fueron civiles. El asesinato sistemático generó diversos efectos entre las víctimas, entre estos desestructurar las relaciones y los vínculos sociales, destruir la identidad y la cultura de una comunidad, que serviría para la imposición armada de los grupos paramilitares y, además, para que estos se instalaran en la cotidianidad de la gente.

La masacre del Planchón.

José Baldomero Linares, alias 'Guillermo Torres', aceptó por cadena de mando su responsabilidad como comandante en la masacre del 5 de julio de 1998 en Puerto Príncipe, Vichada, conocida como la masacre del Planchón en la que murieron al menos 17 personas.

'Guillermo Torres' mencionó los nombres de algunos paramilitares que presuntamente participaron en la masacre, entre ellos el segundo al mando de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada quien tramita su ingreso a la ley de Justicia y Paz, Rafael Salgado, alias 'El Águila'.

Masacre de Puerto Arturo.

En 1999, los paramilitares asesinaron a cinco jóvenes que venían de jugar un partido de fútbol y al papá de uno de los ellos en un caserío sobre los límites del Meta y Guaviare. A esta masacre, que dejó seis personas desaparecidas, se le conoció como la de Puerto Arturo.

Masacre de Caño jabón.

Ocurrida el 4 de mayo de 1998, allí los paramilitares asesinaron a 27 personas.

La masacre de La Picota.

Otra masacre de los hombres de los Castaño fue en La Picota, un caserío en la región de Puerto Gaitán, Meta, en octubre de 1997, ejecutada conjuntamente con José Baldomero Linares, alias 'Guillermo Torres', de las Autodefensas de Meta y Vichada.

Masacre de Tillavá.

La masacre de Tillavá de 1997 fue una acción conjunta entre paramilitares de las ACMV y el Bloque Centauros, al mando de Carecuchillo y El Cura.

Segunda masacre en Tillavá.

Segunda masacre en vereda Tillavá (Meta), 1998 El 3 de julio de 1998 los paramilitares regresaron a la vereda Tillavá de Puerto Gaitán, en el contexto de una acción conjunta de los grupos que actuaban en la región. Esta segunda acción se dio en el escenario de constitución del Bloque Centauros y como manifestación de la pretensión de expansión de las AUC en esta región.

Masacre de Puerto Oriente, Cumaribo (Vichada), 1998.

Puerto Oriente es una vereda del municipio de Cumaribo (Vichada). Dada su proximidad a la frontera con el Meta, es un lugar de tránsito entre los departamentos y un lugar importante para el tráfico y comercio de pasta base de coca, actividad que era regulada desde los noventa por las FARC, lo que imposibilitaba a los paramilitares penetrar en esta

zona del Vichada. Pero el 5 de julio de 1998, dos días después de la segunda masacre en la vereda Tillavá, paramilitares de las ACMV con apoyo del Bloque Centauros y las ACC, entraron por el río Planas y ejecutaron una de las masacres más emblemáticas en la región. Aproximadamente 200 paramilitares ingresaron a Puerto Oriente el 5 de julio de 1998 y asesinaron a cerca de 17 personas que estaban por cruzar el río en un planchón. Fueron recuperados once cadáveres, algunos de los cuales no pudieron ser identificados. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad de 14 y 15 años. Varios fueron descuartizados y otros arrojados al río Planas cuya corriente confluye con el río Vichada. Tres de los once cadáveres no pudieron ser identificados. El hecho ocasionó el desplazamiento de más del 70 por ciento de la comunidad.

Por medio de esta incursión los paramilitares buscaron disputar el control territorial al Frente 16 de las FARC. Para ese momento, el río Planas era una frontera social para los actores armados, en el lado del Meta quienes ejercían control eran los paramilitares y en el Vichada era la guerrilla, lo que contribuyó a que la población que habitaba esta zona fuera señalada como colaboradora de los grupos armados antagónicos.

Segunda masacre de Mapiripán, agosto de 2004.

Entre el 7 y el 18 de agosto de 2004 cerca de 1250 paramilitares de los grupos ACMV, Bloque Centauros y Bloque Calima llegaron a Mapiripán y asesinaron a 22 personas.

Las masacres de Mapiripán de 1997 y 2004 respondieron a objetivos estratégicos diferentes. En 1997 las estructuras paramilitares que no conocían la región necesitaban la participación de las ACMV para orientar la incursión; mientras que en 2004 se desarrolló en el escenario de reconfiguración de los grupos paramilitares en los Llanos Orientales, en el contexto de la guerra entre las ACC y Bloque Centauros, y tenía como propósito el posicionamiento de Cuchillo como actor central para el panorama posdesmovilización. La segunda masacre de Mapiripán evidencia los impactos de la violencia sobre la población del municipio, especialmente como prolongación de la masacre de 1997.

Asesinatos selectivos.

Los objetivos de los asesinatos selectivos fueron: 1) ejercer sanciones sociales que hicieran efectivo el control y la regulación sobre la población civil y sus comportamientos y 2) sancionar a la población civil por su supuesto apoyo o colaboración con los grupos insurgentes. De hecho, estos actos constituyen serias violaciones a los derechos humanos.

El aniquilamiento social.

Asesinatos en razón del orden social impuesto Las motivaciones de los asesinatos de personas consideradas como “infractoras” del orden social están relacionadas con los acervos culturales de los comandantes e integrantes del grupo, quienes al ejercer el poder armado sobre un territorio específico pretendían tanto el control de las dinámicas económicas y políticas como de las culturales.

Desplazamiento forzado en zonas de disputa.

Los escenarios de disputa territorial se caracterizaron por la exposición de altos niveles de violencia, que fueron determinantes para el aumento exponencial del desplazamiento forzado: La sevicia, las masacres, la tortura, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, las minas antipersonas sembradas en el territorio, el reclutamiento forzado de personas menores de edad; todos los actos de violencia son expulsores, todos son un mensaje imperativo que conmina a las víctimas a abandonar su lugar. Los contextos de incursión se caracterizan por un mayor número de combates entre grupos armados antagónicos. En el sur de Puerto Gaitán y el Vichada, los enfrentamientos entre las ACMV y las FARC produjeron el desplazamiento de buena parte de la población civil que quedaba en medio del fuego cruzado entre los grupos armados:

Impactos de la violencia paramilitar sobre el pueblo Sikuani.

La Altillanura es territorio indígena. Según la información proyectada por el DANE, en Meta habitan un aproximado de 12.056 indígenas distribuidos en 20 resguardos, ubicados en seis municipios; y en el Vichada se encuentra una población aproximada de 30.063 indígenas, organizados en 32 resguardos a lo largo de cuatro municipios. En los municipios donde se hicieron presencia las ACMV existen aproximadamente 47 resguardos indígenas de las comunidades Sikuani, Sáliba, Piapoco, Curripaco, Piaroa y Achagua. Los sikuani tienen más población.

La historia de estas comunidades se ha desarrollado alrededor de múltiples violencias ejercidas contra ellos por quienes han invadido sucesivamente su territorio desde las épocas de la Conquista y la Colonia hasta la actualidad. Diversos actores –entre ellos, colonos, grupos armados y fuerza pública– han desconocido la soberanía de estas comunidades indígenas y sus costumbres tradicionales y por ello han padecido constantes vulneraciones y victimizaciones, situación que ha provocado una profunda crisis humanitaria.

Respecto de la violencia de los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que

operan como factores catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado en sus territorios

Las ACMV se valieron de la situación de vulnerabilidad y precariedad para generar escenarios, relaciones e intercambios a favor de sus propósitos y en contrario a los derechos de los sikuani y de los piapocos.

Violencia contra las mujeres.

Según lo ha documentado la Fiscalía, decenas de mujeres fueron secuestradas por los hombres de José Baldomero Linares, alias 'Guillermo Torres', jefe de 'Los Carranceros'. Las llevaban a fincas y las obligaban a trabajar en labores del campo: las hacían cargar piedras de camiones, arreglar carreteras, hacer puentes, tapar huecos y limpiar las calles. Esto a la vista de toda la comunidad, incluso, algunas portaba carteleras donde decía que estaban "castigadas por las Autodefensas".

Otra práctica común entre los paramilitares era dejar calvas a las niñas. Según 'Guillermo Torres' rapaban a las mujeres que llegaban tarde a sus casas, las que se "metían en chismes" y las que "no respetaban las leyes de la organización".

'Guillermo Torres' ha dicho en sus versiones libres que lo que le hicieron a las mujeres contó con el visto bueno del personero municipal, el comandante de la Policía y la fiscal de Puerto Gaitán. El entonces personero, Édgar Silva González, reconoció en una entrevista que para la época era común que se aplicaran ese tipo de castigos. Silva fue alcalde de Puerto Gaitán.

Las Farc en los llanos orientales. El Bloque oriental.

Para finales de la década de los setenta los grupos guerrilleros se fortalecen en la región de los Llanos Orientales, se integran a la conflictividad y se configuran como actores determinantes en las dinámicas sociales. La creación de frentes y expansión de las FARC obedeció a los fundamentos organizativos propuestos con el propósito de superar las dificultades propias de la irrupción guerrillera en la década de los sesenta. Para mediados de la década de los setenta, Las FARC comenzaron a salir de su marginalidad. En esta primera fase, su principal expansión tuvo lugar en zonas distantes y desprotegidas por el Estado, hacia el sur del país, en el área de Caquetá; a lo largo del Magdalena Medio, y en la zona bananera de Urabá; y, de manera secundaria, en algunas regiones del Meta, Tolima, Huila y Valle del Cauca (<https://bit.ly/32rbwdT>).

Las FARC desde su conformación hicieron presencia en lugares estratégicos del Meta, especialmente en el piedemonte, pero no de forma homogénea. Sobre el sur del Meta,

Guaviare, Vaupés y la zona de Sumapaz de Cundinamarca, las FARC se ligaron fuertemente a procesos sociales que dieron origen a experiencias armadas. Pero en Arauca, Casanare, Boyacá y norte del Meta el grupo guerrillero llegó como un ejército de ocupación, desplegado luego de la V Conferencia de las FARC.

La presencia de las Farc en los llanos orientales es la del Bloque Oriental, pues desde 1993 fue el eje central sobre el que se movió esta guerrilla hasta mediados de 2002, cuando alcanzó su mejor momento y empezó su declive.

La Séptima y la Octava conferencias de las FARC en 1982 y 1993, y el Pleno de 1985, son claves para entender la conformación del Bloque Oriental.

La principal conclusión de la Séptima Conferencia realizada en mayo de 1982 en Guayabero (Meta), fue la integración de un ejército revolucionario denominado entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP. También se decidió situar el eje de despliegue estratégico en la cordillera Oriental y a Bogotá como su centro, así como crear una cadena de no menos de doce frentes que partía desde Uribe (Meta) y llegaba hasta la frontera con Venezuela.

La Octava Conferencia determinó que el Bloque Oriental estaría integrado por 22 frentes más los urbanos.

Aunque el Bloque Oriental se empezó a consolidar en 1992, fue en 1993 que se le asignó un área de injerencia que comprendía nueve departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. A estos se sumó la región de los llanos del Yarí, en límites entre Meta y Caquetá, y en particular una parte del municipio de San Vicente el Caguán. Asimismo, estaba presente en una parte del extremo sur de Norte de Santander, en la región del Sarare, en límites con Boyacá y cerca de Arauca. Y finalmente, en una parte del norte del Huila, en límites con Meta y Tolima.

Este Bloque se organizó en varios grupos.

El primero se dibuja en la cuenca del río Ariari, principalmente en los municipios de Vistahermosa, Mesetas, Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Puerto Lleras y en alguna medida, San Juan de Arama. Allí se ubicaron los frentes 7, 42, 43, 26, 40 y el 31, además del EMBO. Asimismo, esta área se configura como retaguardia del Secretariado. Este conjunto de frentes le prestaban seguridad a los altos mandos, pero también se preparaban para proyectar su fuerza hacia Bogotá y rodear la capital.

El segundo grupo de frentes se ubica en el entorno de la capital. El frente 22, en el occidente; el frente 27, en la región del Sumapaz, en el suroriente; el frente 38 en el extremo oriental de Cundinamarca y el frente urbano Antonio Nariño en el corazón de la ciudad.

El tercer grupo de estructuras aparece a lo largo de la cordillera Oriental, lo que permite crear una cadena de frentes entre los departamentos del Meta y Arauca, en la frontera con Venezuela, pasando por Cundinamarca, Casanare y Boyacá. Los frentes 31, 27, 38, 28, 10 y 45 conforman esta cadena.

El cuarto grupo se conformó por los frentes 16 y 39 (Cuenca del Río Meta), los cuales surgieron como desdoblamientos de otras estructuras de las FARC con mayor arraigo social, comunitario y campesino de los Llanos Orientales. Por esta razón, estos frentes se encontraron con comunidades de colonos e indígenas, dedicados a labores agrícolas, ganaderas o al reciente cultivo de hoja de coca. Entre 1978 y 1982, las FARC iniciaron acciones de expansión y crecimiento de sus estructuras. En este periodo emprendieron una colonización de carácter armado, en regiones donde no había presencia previa. En este contexto nace el Frente 16, que actuaría en una gran extensión del Vichada y en la parte oriental del Meta, es decir. En 1987, cuando se rompió la tregua acordada en 1984 con las FARC, ya estaba creado el Frente 39 con influencia en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta). La estrategia económica era controlar rentas como el abigeato y el cultivo de la coca

Otro grupo lo conforman los frentes 1 (Guaviare y Vaupés) y 44 (Mapiripán, Puerto Lopez y Puerto Gaitán).

El Bloque dispuso de varias compañías como la Abelardo Romero, la Manuela Beltrán, la Vladimir Estiven, la Policarpa Salavarrieta en el noroccidente, la móvil Fuerzas Especiales Manuel Martínez, la Joaquín Ballén, la Che Guevara (con presencia en Meta y Cundinamarca), la Arturo Ruiz, La Ever Castro, Juan José Rondón, Yará, Casa Verde y Esteban González, que se movían en los límites entre La Macarena (zona de refugio) y San Vicente del Caguán. La columna móvil Marquetalia en un área muy marcada en los departamentos del Meta, Guaviare, Guainía y Vichada.

Este Bloque pasó de 16 frentes en 1992, a 42 en 2002 y a 56 en 2011. En su momento de mayor solidez el Bloque llegó a estar compuesto por más de cuatro mil combatientes organizados en 37 frentes, 3 columnas y 15 compañías móviles ubicadas en el centro y sur del país.

Aunque el Secretariado nombró a Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko', como el primer jefe del bloque, sería 'Jojoy' quien empezaría a tener el peso militar después del asalto a la base militar de Girasol, el 8 de enero de 1991, en Mesetas (Meta), pleno corazón de la

serranía de La Macarena, territorio histórico del grupo insurgente y donde murieron dos militares y 17 más fueron secuestrados.

Esa fue la primera toma del Bloque Oriental a bases de la Fuerza Pública, con la que destaparía su estrategia de secuestrar militares y policías, para luego considerarlos prisioneros de guerra y así presionar al gobierno para realizar intercambios humanitarios. 'Jojoy', se encargó entre 1988 y 1990 de montar el trabajo de inteligencia del Bloque Oriental sobre bases militares y puestos de policía.

Luego de la muerte de 'Jojoy', el bloque adoptó el nombre de 'Jorge Briceño' y fue encargado a Jaime Alberto Parra Rodríguez o 'Mauricio Jaramillo'.

La educación política y militar

En 1984 el Bloque oriental creó la escuela de entrenamiento Isaías Pardo en el municipio de La Macarena, Meta. Su objetivo fue formar política y militarmente a los futuros comandantes y mandos medios de las Farc

A la escuela Isaías Pardo asistían en promedio entre 300 y 400 guerrilleros, los cuales que participaban en cursos de tres meses durante los que reciben instrucción política y militar.

En septiembre de 1987, 'El Mono Jojoy', creó una columna móvil integrada por guerrilleros de los frentes 13, 14 y 15. Con esos hombres, tenía que cubrir los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vaupés y Vichada. Además, este grupo tenía que brindar seguridad a los miembros del Secretariado -entre ellos 'Manuel Marulanda' y Jacobo Arenas- que se encontraban en la región de Uribe, Meta, y asegurar, vías de escape en caso de que fueran atacados.

Briceño Suárez se tomaría tres años en dar su primer golpe.

El cerco a Bogotá

Es a partir de 1991 cuando el Bloque Oriental de las Farc se empezó a sentir en el centro del país. Lo primero que hizo fue arrear su ofensiva en los departamentos de Meta y Cundinamarca, en el que claramente establecieron como primer objetivo atacar a la Fuerza Pública, buscando que se replegara o abandonara la región.

En esa escalada, Puerto Rico en el Meta fue uno de los primeros municipios en sufrir el recrudecimiento de las acciones de la subversión. El 5 de junio de ese año, guerrilleros del Frente 7 atacaron el comando de policía asesinando a 1 policía, secuestrando a otros 8 y dejando 6 más heridos. En ese mismo municipio, el 19 de junio en la vereda Barranco

Colorado, emboscaron a tropas del Batallón No 10 de la Marina, en el que murieron 8 militares y 13 más quedaron heridos.

Días antes de la operación contra Casa Verde, el 26 de noviembre de 1991, guerrilleros del Frente 52 emboscaron una comisión que iba a realizar el levantamiento de un cadáver en la vereda La Regadera de la localidad 20 de Bogotá. En el atentado murieron ocho personas entre las que se encontraban un juez, un médico, tres secretarios y tres agentes de la policía. Los hombres de 'Jojoy' de los frentes 28 y 45, cerrarían ese año con otra emboscada el 17 de diciembre en la vereda Boquerón de Cordoncillo en el municipio de Guicán, Boyacá, donde asesinarían 14 militares, otro sería desaparecido y 10 más heridos.

En 1992, el único ataque de relevancia del Bloque Oriental lo realizó el Frente 27 a la estación de policía de San Juan de Arama, Meta. Según la Fiscalía, este tipo de arremetidas «estaban enmarcadas dentro de las consideradas como «tradicionales», representadas en presencias, desplazamientos por sus áreas de influencia y algunos hechos armados aislados que se generaban a la par con las conversaciones entre Gobierno y guerrilla, a fin de afianzar los diálogos», refiriéndose a los acercamientos que realizaron con el gobierno Gaviria en Cravo Norte y después en Tlaxcala, México.

Otra explicación a la reducción de las acciones de la guerrilla se debió a que 'Marulanda' decidió que varios frentes, como el 1, el 7 y el 42, fueran destinados a la preparación de la seguridad de la Octava Conferencia Guerrillera, que se realizaría entre el 11 al 18 de abril de 1993, en un sitio entre los ríos Unilla e Itilla, en Calamar, Guaviare.

En esa conferencia, el Secretariado reestructuró el Bloque Oriental y descabezó a 'Timochenko' de su dirección, reubicándolo en el Estado Mayor del Magdalena Medio. También decidieron conformar el Estado Mayor del Bloque Oriental, conocido como EMBO, con el que se dio el ascenso de 'El Mono Jojoy', como su comandante principal; acompañado en la dirección de Marcelino Trujillo Bustos, alias 'Martín Villa'; Noé Suárez Rojas, alias 'Grannoble'; José Epiménio Molina, alias 'Danilo'; y Luis Jiménez Martínez, alias 'Alberto Escuelas'.

Fue en esta conferencia en la que el Secretariado ordenó «crear las condiciones políticas y militares para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá». Para lograrlo establecieron que los frentes que ya estaban posicionados en Cundinamarca, Meta y Boyacá, deberían hacer retenes en las vías que de la capital conducían a Villavicencio, Medellín (autopista), Tunja, Melgar, Chiquinquirá, San Juan, Chocontá, Paz del Río y Cusiana, entre otras.

Área de guerra.

Al tiempo que la guerrilla intensificó sus operaciones en las carreteras el Bloque Oriental pensó en establecer unas zonas de retaguardia y aprovisionamiento. Para lograrlo, El 10 de enero de 1994, el Estado Mayor del Bloque Oriental prohibió el asentamiento de colonos en la declarada «Zona de Guerra y de Reserva», que comprendía gran parte de La Uribe (Meta), y las áreas de los ríos Chigüiro, Guayabo Negro, el Perdido, Moja huevas y el Ley, desde sus nacimientos hasta sus desembocaduras.

Esa región ya había sido despejada por la guerrilla para ser colonizada desde 1978, en donde pretendían tener confrontaciones armadas con el ejército en zonas despobladas con el objetivo de dejar por fuera a la población civil.

En ese comunicado, el EMBO explicó que controlarían el ingreso de colonos «hasta que tengamos nuevas condiciones», y a renglón seguido aseveró que se referían a «si el próximo gobierno logra negociar una salida política al actual conflicto que vive el país».

El Bloque Oriental anunció, además, que ellos entregarían los baldíos a los colonos y ordenaba a los que ya estaban asentados que mejoraran la producción de alimentos para que les «sirviera de apoyo para la zona de guerra». La decisión de escoger esta región no era caprichosa y le serviría a las Farc después como refugio para mantener a los políticos, soldados y policías que secuestró a lo largo de la arremetida que comenzaron en 1997.

La toma y los secuestros

Con estas condiciones, el Bloque Oriental empezó a crear células urbanas para efectuar un cierre a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca, con el fin de «sitiar» a la capital de la República. Una de ellas fue el Frente Urbano Antonio Nariño, que surgió en 1995 entre los municipios de La Uribe y La Macarena, Meta.

Su primer golpe a Bogotá fue el ataque con rockets a la estación de Policía del Barrio Kennedy, el 30 de mayo de ese año, que dejó 3 policías asesinados, y atentados simultáneos contra centros de Atención Inmediata (CAI), en diferentes puntos de la ciudad. Dicho frente quedó bajo la dirección del guerrillero Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada Gallo', quien reclutó universitarios, quienes actuaban desde la clandestinidad y de manera compartimentada, muchas veces sin que unos supieran de la existencia de otros.

A principios de 1996, el EMBO creó la columna móvil Alfonso Castellanos, para impedir el ingreso de los paramilitares a Arauca, concentrándose en Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón.

En septiembre de ese año, el Frente 1 asaltó la vereda La Carpa, de San José del Guaviare, y asesinaron 27 militares. Durante ese año en la zona de influencia del Bloque Oriental se registraron 43 secuestros, principalmente de policías y militares.

El 10 de septiembre de 1997, en plena época electoral, empezaron a secuestrar a políticos, como le ocurrió al candidato a la alcaldía de San José del Guaviare, Pablo Emilio Rojas, y al concejal Delio Franco. Ese mismo día, los frentes 38 y 56 sitiaron al municipio de Pajarito, en Boyacá, dejando 5 militares y 4 civiles muertos.

Un mes después, guerrilleros del Frente 17 minaron la carretera entre San Juan de Arama y el Alto de la Bodega, donde 17 policías resultaron muertos por la explosión. Ese año en total se registraron 60 secuestros, muchos con fines extorsivos a personas adineradas de diferentes regiones.

El 1 de marzo de 1998, en una acción conjunta de 11 frentes con 1.320 hombres armados cuyo objetivo era la base militar de Tres Esquinas en Caquetá, se enfrentaron a un batallón de contraguerrilla en el sitio conocido como El Billar, asesinando a 64 soldados, dejando heridos a 19 y secuestrando a 43, en el que es considerado uno de los peores reveses de la Fuerza Pública en el conflicto armado colombiano.

En ese mismo mes, el EMBO creó el frente Esteban Ramírez, para aumentar el cerco a Bogotá. Al tiempo que decidió fortalecer el suministro de guerrilleros a los frentes que estaban en Cundinamarca, Boyacá y Meta.

Ese año, el Bloque empezó a montar retenes en las vías que comunicaban a Bogotá a cargo de Romaña.

También intensificaron sus acciones en varios departamentos: asaltaron a Puerto Lleras y La Uribe (Meta), dejando como resultado 33 militares muertos y 8 secuestrados; El Retorno y Miraflores (Guaviare).

El repliegue y rearme de la zona de distensión.

Todas estas acciones armadas y secuestros tenían como objetivo mostrar su poderío en el preámbulo del inicio de las conversaciones que adelantaría este grupo subversivo con el gobierno de Andrés Pastrana, el cual decidió despejar un área de 42 mil kilómetros cuadrados que incluyó los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá.

Con cientos de militares, policías y políticos retenidos, el Bloque Oriental se consolidó como la estructura guerrillera de más peso en las Farc. Por eso idearon un plan de fortalecimiento

de sus frentes y que pusieron en marcha apenas asumieron el control del área desmilitarizada.

La guerrilla aprovechó la zona despejada utilizada para mantener a los cientos de miembros de la Fuerza Pública secuestrados, que fueron trasladados a esta región mientras públicamente sus voceros exigían un intercambio humanitario por guerrilleros presos en las cárceles.

El retroceso de la guerrilla

Tras la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, una de sus primeras acciones fue ordenar a los mandos militar atacar a las Farc, especialmente a los frentes que se encontraban en Cundinamarca. Por eso la V División del Ejército desarrolló la operación Libertad 1, que se centró en zonas limítrofes de Cundinamarca, suroriente de Boyacá y oriente del Tolima, para cerrar los corredores de entrada a Bogotá.

En esa operación el Ejército logró dismantelar 3 frentes -el 22, el 54 y la Policarpa Salavarrieta- y debilitó al 53,55 y 56, así como logró la captura de 212 guerrilleros y la muerte de otros 174.

Esta operación obligaría a 'Jojoy' y sus hombres a replantear la estrategia iniciada en 1987. «Esta derrota significó para las Farc el retroceso más grande; a partir de ahí, la dirigencia de la organización planeaban la retoma de esas áreas que perdieron militarmente, fortalecieron y repotenciaron los frentes y columnas que retrocedieron, creando algunas estructuras nuevas con el fin de consolidar los corredores de movilidad que existen sobre los municipios de Lejanías, San Juan de Arama y Mesetas en el departamento del Meta, por donde pueden volver a retornar al departamento de Cundinamarca y cercar nuevamente, Bogotá.

En 2002, Marulanda' expidió un plan llamado 'Veintinueve órdenes' con «el fin de mantener la disciplina en todas las estructuras del Bloque Oriental», seriamente debilitado por la operación Libertad.

Tras el éxito de Libertad 1, las Farc optaron por recoger los pocos hombres que quedaron de los reductos guerrilleros y los llevaron al Meta para supuestamente reorganizar el plan que buscaba el cerco de Bogotá. También renovaron el Estado Mayor del Bloque Oriental y entró a la dirección del EMBO, Mauricio Jaramillo, alias 'El Médico', quien hasta entonces estaba a cargo del hospital de las Farc y había hecho parte del comité temático en las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán.

Fue en 2003 cuando el Bloque Oriental dio su más duro golpe en Bogotá con el estallido de un carro bomba en el club El Nogal, ejecutado por hombres de la Columna Móvil Teófilo Forero, en donde murieron 36 personas. En ese año también detonaron un carro bomba en San Andresito en el que 6 personas perdieron la vida.

Ese año se registraron 804 combates, 160 hostigamientos a poblaciones y como forma de atajar la ofensiva militar, el Bloque Oriental decidió aumentar la instalación de campos minados, el reclutamiento de menores y el plan pistola, que no era otra cosa que el asesinato de miembros de la Fuerza Pública.

Producto de la presión de las Fuerzas Militares, era evidente el debilitamiento del Bloque Oriental, por lo que empezó el repliegue de la guerrilla hacia las zonas de retaguardia. Se sumó el Plan Patriota que desplegó 17 mil militares a las inmediaciones del río Caguán, los Llanos del Yari y la Amazonía, precisamente para recuperar esta retaguardia a donde se refugiaron la mayoría de los frentes del Bloque Oriental.

El mayor golpe que daría el Ejército sin duda sería la desarticulación de los grupos que se concentraron en Cundinamarca y la muerte en diciembre de 2003 de Marco Aurelio Buendía, uno de los jefes del Estado Mayor del Bloque.

En 2007, las Farc realizaron su novena conferencia, que no fue como de costumbre una reunión de los miembros del Secretariado, sino que se realizó por separado en cada bloque y estos a su vez enviaron sus conclusiones al Estado Mayor.

Fue en ese momento en el que dirigieron su estrategia hacia «lo político, el manejo de masas y las finanzas». El plan lo bautizaron 'Yari', con el que definen un área de retaguardia para los bloques Oriental y Sur, adquirir fincas para su sostenimiento.

A partir de 2008, producto del fracaso en sus peticiones de intercambios humanitarios por guerrilleros presos, empezaron a liberar unilateralmente políticos y militares que mantenían secuestrados, como Clara Rojas y Consuelo González, pero también a sufrir reveses con operaciones como Jaque, en la que fueron liberados 15 secuestrados, entre los que estaban la política Ingrid Betancur, tres contratistas estadounidenses, y varios soldados y policías.

Cabe anotar que en 2008, los combates empezaron a caer, de 553 en 2007 a 269 en 2008. Sin embargo, en esa época empezaron a crecer la instalación de campos minados y el reclutamiento de menores.

Es en ese mismo año en que mueren en diferentes circunstancias 'Manuel Marulanda'-de muerte natural-; Iván Ríos –asesinado por su segundo-; y 'Raúl Reyes' –en bombardeo en Angostura, Ecuador. Muertes que afectaron la dirección del Bloque Oriental.

Fue a partir de este momento que las Farc observan la importancia de la frontera no solo como zona de retaguardia estratégica para los diferentes comandantes guerrilleros que lleguen a la misma sino también como área estratégica para sus finanzas, abastecimientos logístico, médico, de armamento y avance político tanto nacional como internacional.

En 2009, los combates disminuyeron producto del repliegue y la estrategia defensiva se concentró definitivamente en la instalación de campos minados. Sin embargo, no lograrían evitar que la Fuerza Pública les diera golpes que terminaron minando la estabilidad del Bloque Oriental, como ocurrió el 13 y 14 de julio, cuando el Ejército liberó en la operación Camaleón a cuatro militares que mantenían secuestrados desde 1998.

Pero sin duda el hecho que más afectó al Bloque fue la muerte, el 22 de septiembre 2010, en un operativo conjunto del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, de Víctor Julio Suárez más conocido con el alias de guerra de 'Jorge Briceño' o 'El Mono Jojoy', quien fue el guerrillero artífice de la consolidación de este grupo subversivo y que hizo crecer a las Farc durante más de dos décadas de violencia.

En su reemplazo llegó 'El Médico', quien sería el protagonista del acuerdo para el inicio de las actuales conversaciones en La Habana. Sin embargo, hoy el Oriental lleva el nombre de Bloque comandante Jorge Briceño.

Desde la muerte de 'Jojoy', 'El Médico' ha ordenado la creación de nuevos frentes como el Vaupés, el Víctor Alirio Saavedra y el Camilo Torres, con el objetivo de facilitar corredores de movilidad, abastecimiento y las finanzas principalmente en la región del Bajo Ariari

En febrero de 2012, las Farc anunciaron que dejarían de secuestrar y las últimas liberaciones de soldados y policías se registró el 4 de abril de 2012, cuando fueron liberados 10 que permanecían en poder de la guerrilla.

El ELN.

La presencia del Eln en los Llanos orientales está referida al Bloque Oriental de dicha organización que opera en los departamentos de Arauca y Casanare, y recientemente hace incursiones en el Vichada (<https://bit.ly/2YucW6r>).

El Frente de Guerra Oriental se conformó a mediados de los noventa, cuando se realizó el 14º Pleno del ELN, en el que se dispuso que los destacamentos y compañías que conformaban los frentes de guerra, pasaran a integrar lo que se denominó la "Fuerza Militar

del Área”, sin abandonar los territorios donde habían tenido presencia. Desde su creación, esta fuerza militar de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare (ABC) ha tenido una alta actividad armada que en los últimos tres años representa alrededor del 40% de la registrada por todo el ELN. Los frentes que hoy integran el Frente de Guerra Oriental son el Domingo Laín Sáenz, Adonay Ardila Pinilla y José David Suárez. La estructura dispone de un componente armado que representa el 30% de los integrantes del ELN, y se ubica en el piedemonte y el llano en los límites de la cordillera Oriental de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. La presencia activa de esta estructura se ha concentrado en la subregión del piedemonte araucano (Tame, Saravena y Fortul), al igual que en Arauquita, zonas de influencia de empresas petroleras que por sus condiciones geográficas propician la dispersión necesarias para desplegar sus estructuras sobre la cordillera Oriental, y por la misma razón, dificultan el ingreso de la fuerza pública.

Cuando después del duro golpe de Anorí (1973) parecía inevitable la disolución del Eln, un frente logró implantarse en Arauca en la segunda mitad de los años setenta en un contexto adverso e incierto. La implantación del frente Domingo Laín, cuyo núcleo inicial se había formado teniendo como objetivo desarrollar trabajo de formación política, de persuasión y de adoctrinamiento del campesinado, tuvo éxito en Arauca.

El Domingo Laín imprimió en la adversidad al ELN un nuevo aire en dos aspectos fundamentales: primero, en su situación económica, y segundo, en sus relaciones con el movimiento popular y campesino, que le dieron autonomía financiera y una fuerte vinculación con la población. Lo anterior también se expresa en una elevada independencia frente a las orientaciones político-militares del Comando Central. El Frente Domingo Laín se convirtió en la mejor expresión de la estrategia de poder popular adoptada como parte medular del proyecto insurgente del ELN, ya que consiguió influir sobre el poder local por fuera y por dentro de la institucionalidad, cumpliendo un papel fundamental como intermediario político y social.

A partir de la denominada Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, realizada en 1983, la organización decidió doblar las estructuras existentes, con el propósito de ampliar su presencia principalmente hacia las zonas mineras y de explotación petrolera. Arauca se convirtió en un escenario de especial importancia para la ampliación del ELN.

Las extorsiones a la actividad petrolera en Arauca permitieron al ELN expandirse y alcanzar el poderío militar necesario para lograr el predominio sobre otros actores armados. Las acciones de sabotaje que se constituyen en un mecanismo de presión para exigir el pago de extorsiones, también permitió a la organización ejercer una presión importante en el mercado laboral temporal directamente relacionado con los daños causados a la infraestructura petrolera. Durante buena parte de los ochenta, en el piedemonte

boyacense y en la zona del Cocuy y Pisba, el ELN predominó en la región a través de los frentes Domingo Laín y la Compañía Simacota. En Arauca, el ELN también primó sobre las FARC, mientras que en Casanare ya se comenzaba a vislumbrar el propósito estratégico de esta última guerrilla de copar la cordillera Oriental, lo que a la postre impidió que el ELN lograra una supremacía.

Con el inicio de la exploración y explotación petrolera en Casanare a comienzos de los noventa, el ELN creció con la presencia de los frentes José David Suárez y Los Libertadores, estrechamente ligados al Domingo Laín. Mientras que en Arauca el ELN sostuvo una elevada actividad en casi todo el departamento, en Casanare se restringió a la zona de influencia de Cupiagua, en especial en Aguazul y Yopal, y más allá de Paz de Ariporo y Hato Corozal. El crecimiento militar del ELN bien puede atribuirse a la confluencia de varios factores. Por una parte, la larga tradición de relación del ELN con movimientos sociales, grupos de colonos y otros habitantes comprometidos con procesos de reivindicación agraria y, de otro lado, el flujo importante de dineros provenientes del petróleo, lo que también se convirtió en fuente de recursos para la población, generando una cierta simbiosis entre el grupo y la población a partir de la economía de la región.

Después de la desmovilización de los paramilitares en 2005, se desató una disputa en Arauca entre las FARC y el ELN, que tuvo un elevado impacto humanitario.

Aunque el Frente de Guerra Oriental logra constituirse en la estructura más numerosa y activa del ELN, es inocultable la reducción no sólo en su accionar armado sino también en su capacidad política tras el enfrentamiento con las FARC. De ahí la disposición del frente Domingo Laín a aceptar la propuesta del frente X, de poner fin al enfrentamiento que tenían desde 2005, con un acuerdo de no agresión y reparto del territorio que se concreta en 2010. En los últimos años, la presencia activa del Frente de Guerra Oriental se limita al departamento de Arauca, ya que en Boyacá y Casanare la actividad armada, con los niveles más bajos de los últimos quince años, es prácticamente irrelevante.

Violencia contra la UP.

La clase política tradicional del Llano sintió que el avance de la UP amenazaba su poder en la región y comenzó a presionar al gobierno nacional para que militarizara la región, con el argumento de que guerrillas y narcotraficantes se la estaban tomando. Entre los políticos tradicionales que protestaban estuvieron Leovigildo Gutiérrez, Jorge Ariel Infante, Alfonso Latorre Gómez y Hernando Durán Dussan (<https://bit.ly/3lqDS0T>).

El gobierno accedió a las peticiones, militarizó la zona, y fue uno de los lugares del país donde mantuvo un régimen legal de estado de excepción que coartaba las libertades.

Muy pronto empezaron los atentados contra los líderes de la UP. Según reportó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, los primeros en caer a manos de sicarios del paramilitarismo fueron en 1985, Hernández Yate Bonilla, concejal por la Unión Patriótica de Granada y en 1986, Rafael Reyes Malangón, concejal de Granada por la UP; Octavio Vargas Cuellar, representante a la Cámara; y Pedro Nel Jiménez, senador de la UP; en 1987 cayeron abaleados Alfonso Perdomo, concejal de Vista Hermosa por la U. P.; Arnulfo Vargas Dimate, concejal de El Castillo por la U. P. y Gabriel Alfredo Briceño, concejal de la UP en Villavicencio.

Nadie encarna más la persecución sistemática a la UP en Meta que María del Carmen Trujillo. En 1986 mataron a su hijo Geraldo en Granada. Cuatro meses después su otro hijo Nelson fue asesinado y presentado por el Ejército con botas, una pistola y una granada. En 1988 desconocidos bajaron de un bus a su esposo Julio Cañón, entonces alcalde por la UP de Vista Hermosa, y lo asesinaron. El 11 de enero de 1989 su hijo Vladimir desapareció cuando estaba en el Meta.

¿Quiénes desataron semejante cacería? Varios de los relatos que han dado diversos testigos a la justicia y a la prensa, señalan a 'Los Masetos' como los responsables. Los hombres de Rodríguez Gacha habían desatado una persecución de todo aquél que estuviera relacionado con las Farc. Según lo han documentado varios investigadores, estas guerrillas le robaron a este poderoso capo más de 300 kilos de pasta de coca de un laboratorio de procesamiento que él tenía en compañía de Leonidas Vargas. En retaliación 'El Mexicano' se declaró en guerra contra las Farc y sus hombres mataron a diestra y siniestra en San Juan de Arama, Granada, Vista Hermosa, entre otros pueblos del Meta.

En diciembre de 1987, llegó como comandante de la VII Brigada del Ejército con asiento en Villavicencio, el general Harold Bedoya Pizarro, con larga trayectoria de combate contrainsurgente, entrenado en la Escuela de las Américas. Desde el comienzo libró batallas verbales con los dirigentes comunistas y de la UP, y los acusó de ser el brazo político de la guerrilla, según lo registró la prensa de la época.

Y mientras tanto, bajo su comandancia, no se logró mermar los asesinatos de dirigentes políticos y agrarios del Meta. Al contrario, éstos arreciaron. Tan solo en 1989 fueron asesinados 31 miembros de la UP, entre ellos Luis Eduardo Yaya Cristancho, de 52 años, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores del Meta (FESTRAM), ex diputado de Asamblea de este departamento por la UP.

Aparecieron también grupos de extrema derecha, que usaban diferentes nombres, pero que muchos atribuyen a versiones locales de 'Los Masetos'. En agosto de 1986, el asesinato

del concejal de Granada por la UP, Reyes Malagón, fue perpetrado por el grupo ‘Los Verdaderos Patriotas’, organización que se atribuyó otros crímenes de la Unión Patriótica.

El asesinato de Luis Antonio Pérez, abogado, exconcejal y exdiputado a la Asamblea departamental, integrante de la Unión Patriótica marcó el inicio de la violencia contra la UP en los municipios que componen la Altillanura metense y se inscribe en este tipo de violencia aleccionadora.

Parapolítica.

Fueron pocos los puestos políticos donde Arroyabe no metió la mano: gobernadores, alcaldes, concejales aceptaron pactos, dinero o fueron intimidados. La lista de condenados, investigados o salpicados es larga. Casi todos los gobernadores o candidatos a serlo quedaron en entre dicho por su cercanía a este bloque paramilitar, entre ellos, Edilberto Castro, Euser Rondón (qepd), Nebio Echeverry, José Alberto Pérez, Miguel Ángel Pérez, Óscar de Jesús López Cadavid y William Pérez Esquivel (<https://bit.ly/31rnPaP>).

Antes de ser extraditado a los Estados Unidos, Don Mario afirmo que, Nebio Echeverry, había conformado un frente paramilitar en el Guaviare donde ha sido gobernador. Además que el exsenador Luis Carlos Torres – esposo de la hoy congresista Maritza Martínez-, junto al paramilitar Miguel Arroyabe había pactado la muerte de Carlos Javier Sabogal y Euser Rondón y que esto estaba en la impunidad.

También afirmó que el contratista Andrés Rueda, en el departamento de Casanare había financiado al frente Pedro Pablo Gonzales y Héroes de los Llanos Orientales. Según’ Don Mario’, Torres primero financiaba a Martín Llanos y después al Bloque Centauros. Pero además, dijo que Torres era “contratista de Vargas Lleras”.

En los procesos de la parapolítica en los Llanos orientales fue clave la reunión realizada a finales del 2003 en la finca ‘Los Mandarinos’, a dos minutos de El Dorado, principal escondite de Arroyave y ‘Don Mario’. A esta reunión asistieron políticos muy amigos del Bloque centauros como Euser Rondón y a su hermano Wilmar, la diputada Nubia Sánchez y el alcalde Germán Chaparro, entre varios otros políticos del Llano.

Neoparamilitarismo.

El neoparamilitarismo o las denominadas en el Acuerdo de Paz Organizaciones sucesoras del paramilitarismo han cobrado gran vigor en años recientes y los Llanos orientales no son la excepción (<https://bit.ly/3grqPZ1>).

Desde finales del 2019, en Puerto Gaitan, Puerto Lopez y Cumaribo, delinquen ocho grupos armados. Cinco son sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): las

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las Autodefensas Unidas de la Orinoquia o Los Cuchillitos, Los Rastrojos, los Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y el Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano (Erac). Estos últimos registran mayor presencia en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.

A ellos se suman la “creciente presencia” de grupos armados de las facciones disidentes del Bloque Oriental de las extintas Farc tras su dejación de armas al firmar el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016; y en “menor medida de células” del Eln, que han comenzado a tener mayor injerencia en la población que reside en el suroccidente de Puerto Gaitán, con el fin de expandir su presencia y control territorial desde la confluencia de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, hacia la zona norte del municipio (<https://bit.ly/3grqPZ1>).

El valor de esos municipios se encuentra en el tránsito de narcóticos y otras actividades ilícitas, que desde el sur del departamento del Meta y también del Guaviare, se transportan o bien en dirección del piedemonte llanero (a través de la cordillera Oriental en los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca) o bien hacia el norte y oriente del departamento del Vichada (a través del río Meta y jurisdicción de algunos municipios del departamento de Casanare) en dirección al territorio venezolano (Estados Apure y Amazonas).

Desde mediados del año 2019, los Grupos Armados Organizados (GAO) sucesores del paramilitarismo intensificaron sus acciones violentas de control social y territorial de la población civil.

El accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos y Puntilleros – Bloque Meta o Libertadores del Vichada, parece obedecer a los procesos de reacomodamiento de las estructuras remanentes asociadas a las que en otrora hicieron parte de las extintas AUC.

Las disidencias de las Farc se encuentran hacia la zona rural del suroriente de Puerto Gaitán, en las veredas Alto Tillavá, Corozal, Puerto Trujillo, entre otras, en límites con el municipio de Mapiripán, que ha sido de uso histórico por parte de las organizaciones guerrilleras para cultivos de hoja de coca para uso ilícito y producción de clorhidrato de cocaína.

En cuanto a la guerrilla del Eln, que decretó un cese al fuego unilateral hasta hoy a raíz de la emergencia que desató la pandemia del Covid-19, indica que, en conjunto con las facciones disidentes de las Farc, estaría incursionando en la región del Siare y las áreas rurales vecinas de Puerto Gaitán.

Aunque la fuerza pública logró dismantelar esta banda criminal, en la actualidad hacen presencia en la zona, dos organizaciones ilegales heredadas de la presencia paramilitar, los

llamados 'Libertadores del Vichada' y el Bloque Meta, que según fuentes en la zona, concentran sus actividades en el cobro de vacunas y de seguridad privada.

Los departamentos de Vichada y Guainía tienen la particularidad de ser grandes en cuanto a su extensión territorial y muy poco habitados; gran parte de su territorio es selvático, son atravesados por redes fluviales, el despliegue de las Fuerzas Militares es reducido y se concentra en las capitales departamentales.

En la práctica, esto los convierte en espacios vacíos, propicios para el desarrollo de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal que son reguladas por actores armados.

En estos departamentos hacen presencia activa las disidencias de los Frentes 1, 16, y Acacio Medina de las antiguas Farc-ep, el Frente Rafael Blanco Flórez del ELN y el Bloque Libertadores del Vichada (<https://bit.ly/3grqPZ1>).

En cuanto a la disidencia del Frente Acacio Medina, mantiene rutas de movilidad que van desde Barranco Mina en el Guainía y Cumaribo en el Vichada hasta el río Orinoco, pero con mayor presencia y actividad en Venezuela por el río Venturi hasta los márgenes del Arco Minero del Orinoco en el estado de Amazonas.

El ELN hace presencia en el territorio por medio del Frente Rafael Blanco Flores adscrito al Frente de Guerra Oriental.

Esta guerrilla inicia un proceso expansión territorial desde 2016 aprovechando los vacíos dejados por la desmovilización y desarme del Bloque Oriental de las Farc-ep.

El Bloque Libertadores del Vichada (BLV) nace después de la desmovilización de las AUC en el año 2006.

BLV se ubica en los siguientes municipios del Vichada: Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía. Dentro del entramado criminal de la región, el BLV solo ejerce control en puntos específicos de la estratégica ruta del narcotráfico que se inicia en la margen norte del departamento del Meta en el municipio de Puerto López y va hasta Puerto Carreño (Vichada) en la frontera con Venezuela. Lo que evidencia que esta organización armada funciona como un dinamizador de la economía del narcotráfico con algunas interacciones de carácter transnacional.

Desplazamiento y víctimas.

Una de las consecuencias más dramáticas de la violencia en los Llanos orientales es el desplazamiento forzado de miles de personas desde los territorios hacia los principales centros urbanos de la región como Villavicencio. Las víctimas en los Llanos se acercan a las

300 mil personas, mujeres, campesinos, indígenas, afros y trabajadores afectados por la acción de los diferentes actores de la violencia social.

Son miles de campesinos e indígenas afectados por el despojo de tierras que aún permanece en la impunidad particularmente en las regiones donde se adelantaron procesos de reforma agraria.

La construcción de Memoria histórica en los Llanos orientales.

Desgraciadamente en Colombia ni las grandes movilizaciones de la sociedad civil, ni la inclusión política de nuevos grupos sociales, ni la reforma económica, ni los proyectos de reforma institucional que introdujo la Constitución de 1991, ni el conocimiento sobre la existencia de ocho millones de víctimas, ni los Acuerdos de paz con las Farc, han logrado revertir las dinámicas de la violencia. La Colombia contemporánea se caracteriza por la existencia en la vida nacional colombiana de la confrontación extrema, el terror, todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y el “democidio” entendido como el conjunto de acciones que con importante compromiso del Estado ha conducido a los paramilitares y neoparamilitares a estrategias de extinción programada y sistemática de los grupos de oposición y sus posibles bases sociales en un exterminio proclamado como solución de lucha antiguerrillera. Así, el guerrillero devino “enemigo interior” y ese criterio se extendió a los “colaboradores de la guerrilla” y a campesinos, indígenas y pobladores habitantes de las zonas con presencia guerrillera, convertidos todos en blancos de la acción bélica contrainsurgente. En este conflicto de cerca de cien años se han enfrentado grupos armados subversivos, estatales y paraestatales, en una guerra civil que ha tenido graves consecuencias en la población como la ruptura cultural, política y social. Este país se define entonces por una des-estructuración socio-política que, en el marco del conflicto armado interno y de las presiones del imperialismo, ha coadyuvado el fortalecimiento del neoliberalismo, pero también de formas autónomas de organización política y de producción simbólica surgidas entre las clases subalternas. Esta acción bélica prolongada subsiste en un marco de legitimación social de los poderes establecidos. Sobre este conflicto armado y su barbarie es poco lo que se informa y en el manejo de la información predomina la construcción de imágenes falsas y el ocultamiento, que conducen no solo a la desinformación, sino a la apatía e incluso a la complicidad con los actos atroces. Ello, porque muchos análisis de los medios masivos de comunicación se sumergen en la globalidad y son siempre fríos, distantes y sin una referencia concreta a los responsables, las personas víctimas, los lugares y fechas concretas, las circunstancias y los elementos de análisis de los hechos.

El testimonio de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica

Para los investigadores, resulta complejo y a veces casi imposible acceder a las voces de las víctimas sobrevivientes que den verdaderamente cuenta de lo ocurrido. En ellas prima el afán por la supervivencia. Si lograron salvar sus vidas, no quieren arriesgarlas con la denuncia o la exigencia de justicia que puede conducirlos -y los ha conducido en muchas oportunidades- a la revictimización. Muchas de ellas se resignan al silencio y dado el mal funcionamiento de la justicia que se traduce en impunidad, no se atreven a denunciar a los victimarios. Frente a los hechos de violación de los Derechos Humanos es en extremo difícil convencer a una víctima, o a un testigo para que rinda una declaración; ellos están convencidos de que con sus declaraciones firman su sentencia de muerte y nuevas persecuciones. Algunos, sin embargo, desafían la impunidad y la falta de verdad y memoria y rinden sus declaraciones, algunas de ellas judiciales y otras extrajudiciales. Entre ellos y ellas se encuentran las víctimas que han dado sus testimonios, convencidos de la importancia de dejar una huella para la memoria que pueda dignificarlos y recobrar el buen nombre de sus familiares desaparecidos o asesinados. En las circunstancias del país, la construcción de la memoria histórica se convierte en una cuestión de relevancia dentro de la sociedad, bien sea desde la perspectiva historiográfica, o desde la política. Es fundamental trabajar en la construcción de una memoria histórica razonada e incluyente. Se hace relevante en el marco de la labor del investigador de la memoria, ubicar las experiencias y vicisitudes personales expresadas en los relatos de las víctimas, en un panorama en que tanto el narrador como los lectores, entiendan que más allá de los episodios de dolor y muerte vistos por las víctimas a nivel personal, se encuentra un contexto de conflicto social, político y económico de orden nacional e internacional dentro del cual su drama se suma al de varios millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano. Este ejercicio de comprensión habrá de ayudar a las víctimas a auto gestionar su pasado, su presente y su futuro. Igualmente, habrá de aportar a la sociedad civil y en general, al reconocimiento de la tragedia que ha vivido y vive Colombia, con miras a que sea la sociedad en su conjunto la que pueda empeñarse en la construcción de un país consciente, que asume sus responsabilidades frente al conflicto y que así abre senderos de construcción de paz. El trabajo que hemos hecho en Granada, Puerto Gaitán, Puerto Concordia, San Juan de Arama, Puerto Lopez, Puerto Rico, Vistahermosa, Villavicencio mediante entrevistas con víctimas del conflicto, lo hemos realizado con las metodologías de la “historia oral” por su capacidad de transmitir las “voces de la historia reciente” y la “historia desde abajo”, como una forma de interacción con el pasado inmediato y con las vivencias y procesos de las clases ubicadas en los márgenes sociales, porque permite “dar voz” a quienes se les ha negado, dirigiendo las miradas a aquellos sectores sociales que han sido excluidos de los relatos de la historiografía tradicional y/ oficial.

También ha sido clave identificar el trabajo realizado en la región por el Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente en Puerto Gaitán y en la Altillanura con las víctimas de las ACMV (Carranceros), Centauros y Buitragueños.

No hay que olvidar que la memoria colectiva y el olvido colectivo también son necesariamente materia de gran relevancia para el historiador de lo oral, en cuanto que las personas experimentan los hechos como individuos, pero también como miembros insertos en una particular cultura ubicada en un tiempo y un espacio específico. Este trabajo se propone como una labor de Derechos Humanos y como tal asume su deber de recordar, enseñar, conservar, motivar, diversificar, recuperar y asistir el interés de resignificación de las luchas de diferentes grupos y sectores y la construcción de la memoria histórica razonada como construcción social y para la sociedad. Desde luego, es importante señalar que, en el ejercicio de la memoria en Colombia, no es aceptable la neutralidad. La garantía de los derechos de las víctimas y la movilización social para la no repetición, son imperativos que obligan a tomar partido por la verdad, a menos que se pretenda continuar con el desconocimiento de la realidad de millones de personas sometidas a crímenes de lesa humanidad, con consecuencias sobre toda la sociedad.

Memoria histórica comprometida con la resistencia.

Es preciso no olvidar que la memoria individual y colectiva puede ser funcional al poder o a las resistencias y que no basta con la mera representación del pasado para celebrar un avance de reconocimiento ligado a la garantía de derechos y la no repetición. Hacer y tener memoria es mucho más que evocar el pasado tal y como fue en realidad, puesto que las relaciones e intereses del presente son la marca que determina el riesgo de la posible manipulación. Para evitarla es preciso ampliar el proceso de construcción de memoria desde las víctimas y esa es la tarea que nos hemos propuesto. Las Víctimas son las verdaderas actoras de este texto en donde los relatos emergen como escenarios de dotación de sentido, de capacidad de articulación, de comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con la dominación.

Conclusiones

El análisis sobre el neoparamilitarismo, la violencia y la situación de las víctimas de la misma en los Llanos orientales que hemos hecho acá ha tenido como propósito recuperar la memoria de las dinámicas de la violencia en la región que han afectado a millones de seres humanos cuyo derechos no han sido reconocidos por un Estado que es una simple maquinaria puesta al servicio de poderosas elites inmersas en la corrupción y en el desconocimiento de los derechos de la población.

Bogotá, 25 de agosto del 2020.

